

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS**



**TESIS**

**“LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS CONTRA LA  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA RESPONSABILIDAD  
RESTRINGIDA”**

**Presentada por:**

**Br. IRIS ISABEL CURAY NAVARRO**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO**

**Línea de Investigación Institucional:  
Legislación y Ciencias Políticas**

**Sub-línea de Investigación:  
Derecho Penal: Nuevas Tendencias**

**PIURA – PERÚ  
2018**

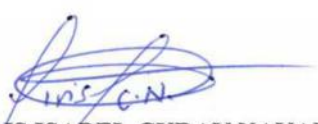
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS**



**TESIS**

**“LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS CONTRA LA  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA RESPONSABILIDAD  
RESTRINGIDA”**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO**

  
**Bach. IRIS ISABEL CURAY NAVARRO**  
Ejecutor

  
**Mg. ANDRES ERNESTO VILLALTA PULACHE**  
Asesor

**Línea de Investigación Institucional:  
Legislación y Ciencias Políticas**

**Sub-línea de Investigación:  
Derecho Penal: Nuevas Tendencias**

**PIURA – PERÚ  
2018**

## DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DE TRABAJO DE INVESTIGACION

Yo: **IRIS ISABEL CURAY NAVARRO** identificada con DNI N° **73228291**, en la condición de Estudiante Egresada, de la Facultad de **DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**, Escuela Profesional de **DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS** y domiciliado en **A.H. EL INDIO Mz. CH2 LOTE 28** Distrito de Piura, Provincia de Piura, Departamento de Piura, Celular: **937092724**, Email: **curayisabel2@gmail.com**.

**DECLARO BAJO JURAMENTO:** que la Tesis Titulada “LA IMPRESCRIPTIBILIDAD EN LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA” que presento a la Oficina Central de Investigación (OCIN), es original, no siendo copia parcial ni total de un trabajo de investigación desarrollado, y/o realizado en el Perú o en el Extranjero, en caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el Art. N° 411, del código Penal concordante con el Art. 32° de la Ley N° 27444, y Ley del Procedimiento Administrativo General y las Normas Legales de Protección a los Derechos de Autor. En fe de lo cual firmo la presente.



Piura Diciembre del 2018

DNI N° 73228291

Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Art. 4. Inciso 4.12 del Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales –RENATI Resolución de Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD

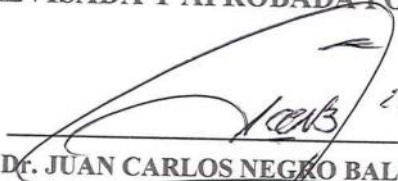
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS**




**TESIS**

**“LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS CONTRA LA  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA RESPONSABILIDAD  
RESTRINGIDA”**

**TESIS REVISADA Y APROBADA POR EL JURADO**

  
Dr. JUAN CARLOS NEGRO BALAREZO  
Presidente

  
Dr. JUAN WILBER CEBRIAN BARZOLA  
Secretario

  
Mg. JORGE OMAR SANTAMARIA MORILLO  
Vocal

**PIURA – PERÚ**





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**  
**UNIDAD DE INVESTIGACIÓN**



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

**ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS**  
**012-UI-FDCCP-UNP-2019**

Los miembros del Jurado Calificador que suscriben, reunidos para evaluar la Tesis titulada: "**LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA**" presentada por la Bachiller **IRIS ISABEL CURAY NAVARRO**, con el asesoramiento del Mag. Andrés Ernesto Villalta Pulache; oídas las observaciones y respuestas a las preguntas formuladas y, de conformidad al Reglamento de Tesis para la obtención del Título Profesional, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la declaran:

APROBADA ☒

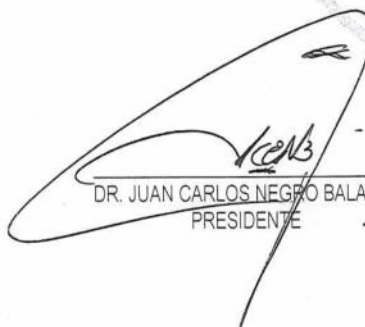
DESAPROBADA ( )

Con la mención de:

**SOBRE SALIENTE**

- ☒ En consecuencia, queda en condición de ser ratificado por Consejo de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura y recibir el Título Profesional de Abogado.
- ☒ En consecuencia, queda en condición de ser ratificado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Piura y recibir el Título Profesional de Abogado, después de que la sustentante incorpore las sugerencias del Jurado Calificador.

Piura, 19 de enero de 2019

  
DR. JUAN CARLOS NEGRO BALAREZO  
PRESIDENTE

  
DR. JUAN WILBER CEBRIÁN BARZOLA  
SECRETARIO

  
MAG. JORGE OMAR SANTA MARÍA MORILLO  
VOCAL

## **DEDICATORIA**

El presente trabajo está dedicado a mi familia, que siempre estuvo pendiente de mis logros y en especial a mi padre, por ayudarme a encontrar mi vocación, por quien gracias a él hoy disfruto de mi profesión.

## **AGRADECIMIENTO**

Quiero agradecer a Dios, a mi familia, a mis amados padres y hermano, por apoyarme siempre en todo momento, gracias por la compañía brindada en cada una de las etapas de mi vida; también agradezco a mi Asesor por enseñarme el valor de los estudios, a superarme cada día y por sus sabias enseñanzas.

## INDICE GENERAL

RESUMEN.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
INTRODUCCIÓN .....	14
CAPÍTULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA.....	15
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.....	15
1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN.....	16
1.3 OBJETIVOS .....	17
1.3.1. Objetivo General .....	17
1.3.2. Objetivos Específicos.....	17
1.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN .....	17
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO .....	18
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .....	18
2.2. BASES TEÓRICAS.....	18
2.2.1. REDUCCION DE PLAZOS PRESCRITORIOS.....	18
2.2.2. RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA .....	19
2.2.3. LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DELITO .....	19
2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS .....	21
2.4. MARCO REFERENCIAL .....	22
2.4.1. ACCION PENAL.....	22
2.4.1.1. Concepto y alcance de la acción penal.....	22
2.4.1.2. Caracteres de la acción penal .....	22
2.4.1.3. Ejercicio, renuncia y extinción de la acción penal .....	24
2.4.2. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.....	25
2.4.2.1. Concepto.....	25
2.4.2.2. Naturaleza jurídica .....	26
2.4.2.3. El régimen de la prescripción de la acción penal .....	26
2.4.2.4. Fundamento de la prescripción.....	27
2.4.3. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.....	28
2.4.3.1. Delitos contra la Administración Pública.....	28
2.4.3.2. Clasificación de los delitos contra la Administración Pública .....	29



2.4.3.3.	El bien jurídico protegido.....	32
2.4.3.4.	Los Actores De Corrupción.....	33
2.4.3.5.	Técnicas De Corrupción.....	35
2.4.5.	EL DELITO DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS.....	36
2.4.6.	IMPREScriptIBILIDAD DE LA ACCIÓN PENAL.....	38
2.4.6.1.	Antecedentes de la imprescriptibilidad en el Perú .....	38
2.4.6.2.	La imprescriptibilidad en la legislación comparada.....	39
2.4.7.	REDUCCIÓN DE PLAZOS PRESCRIPTORIOS .....	42
2.4.7.1.	Definición.....	42
2.4.8.	LA RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA .....	43
2.4.8.1.	Definición.....	43
2.4.8.2.	Responsabilidad restringida en el Perú .....	44
2.4.8.3.	Responsabilidad restringida en la Legislación comparada.....	45
2.4.9.	DERECHO A LA IGUALDAD.....	48
2.4.9.1.	Algunas precisiones conceptuales básicas.....	48
2.4.9.2.	Contenido del derecho.....	48
2.4.9.3.	Derecho a la igualdad en la constitución política de 1993 .....	49
2.4.9.4.	Normas generales sobre la igualdad.....	50
2.4.9.5.	Prohibición de la discriminación.....	52
2.4.9.6.	Las formas de discriminación directa o indirecta.....	52
2.4.9.7.	Discriminación y Diferenciación.....	52
CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO .....		55
3.1.	ENFOQUE .....	55
3.2.	DISEÑO: .....	55
3.3.	MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS .....	55
3.4.	FUENTES, TÉCNICAS, E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.....	56
3.5.	ASPECTOS ÉTICOS.....	57
CONCLUSIONES .....		64
RECOMENDACIONES .....		65
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....		66
ANEXOS .....		69
APÉNDICES.....		72

## **ÍNDICE DE TABLAS**

Tabla 1 Delitos contra la Administración cometido por particulares .....	30
Tabla 2 Delitos Contra La Administración Pública Cometidos Por Funcionarios .....	32

## ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1.....	69
Anexo 2.....	70
Anexo 3.....	71

## RESUMEN

El presente trabajo parte del tema de la responsabilidad restringida y las consecuencias jurídicas que esta tiene, las cuales muchas veces son vulneradas por el legislador, y llevan a que las Salas Penales mediante Acuerdos Plenarios diluciden y remarquen la naturaleza de dicha institución, por la que no se les debe discriminar.

Así pues, siendo una de las consecuencias de esta responsabilidad restringida la reducción de los plazos prescriptivos a la mitad; nos preguntamos si ¿es correcto que la imprescriptibilidad se aplique sin excepción alguna a los funcionarios y servidores públicos así como a los particulares que cuenten con imputabilidad disminuida?, pues repárese que ello genera contradicción y vulneración al principio de igualdad, derecho que contiene tanto un mandato constitucional como humano. Toda la jurisprudencia y doctrina jurisprudencial, que ha sido tomada como base en desarrollo de esta tesis, tiene como arista principal la aplicación de test de proporcionalidad y colisión del principio de igualdad, por lo que ante tal escenario de inconstitucionalidad descrita, la cual atenta directamente con el principio de igualdad al establecer -sin excepción alguna- la imprescriptibilidad para cualquier sujeto activo, en razón de la gravedad del delito.

Así pues, en la presente investigación se pretende, mediante el uso de la argumentación jurídica y jurisprudencial, el análisis doctrinal y jurídico a favor de la aplicación de la responsabilidad restringida, para así determinar si corresponde o no aplicar la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública en las personas que se encuentren en esta eximente imperfecta; para luego a través de nuestra propuesta legislativa modificar el artículo 80 último párrafo del Código Penal.

**Palabras clave:** Derecho penal, imprescriptibilidad, responsabilidad restringida, principio de igualdad.

## ABSTRACT

The present work is part of the subject of restricted responsibility and the legal consequences that this has, which are often violated by the legislator, and lead to the penal rooms through plenary agreements Dilucidate and remark the nature Of that institution, for which they should not be discriminated against.

That's right, is one of the consequences of this restricted liability, the reduction of the prescriber deadlines by half; We wonder whether it is right that the applicability be applied without exception to public officials and servants as well as to individuals with diminished imputability?, then be prepared that this generates contradiction and violation of the Principle of equality, right which contains both a constitutional and a human mandate. All the jurisprudence and jurisprudential doctrine, which has been taken as a basis in the development of this thesis, has as the main edge the application of proportionality test and collision of the principle of equality; Therefore, in the face of such a scenario of unconstitutionality described, which is directly attentive to the principle of equality in establishing-without exception-the applicability for any active subject, because of the seriousness of the crime.

Thus, in the present research, it is intended, by means of the use of legal and jurisprudential arguments, the doctrinal and legal analysis in favour of the application of restricted liability, in order to determine whether or not to apply the Applicability of crimes against public administration in persons who are in this imperfect exemption; Then through our legislative proposal amend article 80 last paragraph of the Penal code.

This research is based on a study of analysis and argumentation theoretical and jurisprudential of the figures matter of study, in order to contribute juridically to the legislation.

**Keywords:** criminal law, applicability, restricted liability, the principle of equalit

## INTRODUCCIÓN

En América Latina la corrupción siempre ha sido un problema permanente y difícil de solucionar. En las últimas décadas, sin embargo, se ha hecho más evidente que este problema ha empezado a afectar seriamente la gobernabilidad de nuestros países. El problema de la corrupción en nuestro país es un problema social, y desde que existe el Estado, o desde existe alguien que ostenta una situación de poder o de privilegio respecto del resto de ciudadanos, en función de un cargo público, existe corrupción. Si bien no existe una respuesta unánime sobre el origen de la corrupción, hay consenso en que es nociva para el país, no sólo por las pérdidas económicas que genera, sino también porque hace insostenible la vida en sociedad, ya que implica no solo una pérdida de valores sino que impide lograr el desarrollo y bienestar que toda la sociedad anela alcanzar.

Luego de grandes eventos de corrupción sistemática en el pasado (1990-2000) y de la persistencia actual de hechos delictuosos cometidos contra el Estado por los funcionarios y servidores públicos, es preocupación de la ciudadanía, por cuanto pone también en peligro el normal desarrollo y funcionamiento del aparato estatal, y con ello se perjudica a toda la población. Esto ha llevado a que el pueblo clame por la imprescriptibilidad de estos delitos, ya que la mayoría de peruanos considera que el principal problema que nos aqueja es la corrupción, y por lo tanto los esfuerzos del gobierno deben estar enfocados a combatir este flagelo.

En ese sentido, con el propósito de hacerle frente a la corrupción, el Congreso de la República presentó en el periodo del 2011 al 2016 siete proyectos de ley orientados a la reforma del artículo 41° de la Constitución y la normativa del Código Penal respecto a la prescripción, en aras de establecer la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Tal es así que el 20 de agosto de 2017 se promulgó la ley 30650, en la que se agregó en el cuarto párrafo del mencionado artículo, que los delitos contra la Administración Pública o contra el patrimonio de Estado eran imprescriptibles en los supuestos más graves.

Un dato particularmente grave es la multiplicidad de casos que demuestran que este problema no es exclusivo de los regímenes autoritarios o de las dictaduras, sino que también está muy presente en los gobiernos democráticos. Paralelamente, las diferentes y muy diversas manifestaciones de la corrupción han puesto en evidencia las serias y graves deficiencias de las instituciones de control estatal y de persecución del delito.

De otro lado como medida de política criminal el legislador ha establecido que cuando se trate de personas menores de 18 a 21 años de edad y mayores de 65 años de edad, la responsabilidad penal debe ser restringida y con ello atenuar las demás consecuencias de la acción penal, como es la reducción de los plazos de prescripción.

En el presente trabajo de investigación se realizó un análisis legal, jurisprudencial y doctrinario de la modificación del artículo 41° de la Constitución Política del Estado, en lo que concierne a la imprescriptibilidad de los delitos cometidos contra la Administración Pública o contra el patrimonio del Estado.

Para el desarrollo del presente trabajo mediante el método analítico e inductivo se estudió las instituciones jurídicas de la responsabilidad penal restringida, la cual es un tratamiento especial que se basa en la condición personal del agente; la prescripción; delitos contra la Administración Pública y principios como el derecho a la igualdad entre otros, a fin de determinar si resulta factible la reducción de los plazos prescriptorios cuando se trata de este tipo de delitos y en los casos en que se declaren imprescriptibles.

Finalmente se llegó a conclusiones que tienen como finalidad realizar una correcta aplicación de la institución jurídica de la responsabilidad restringida ante la imprescriptibilidad de los Delitos Contra la Administración Pública.

# **CAPÍTULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA**

## **1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA**

El principal problema del País en la actualidad, es la corrupción, cada semana miles de peruanos se decepcionan de las autoridades que eligieron mediante voto popular, o de los funcionarios o servidores Públicos de instituciones que deberían estar al servicio del pueblo, por los escándalos de corrupción. Esta es un mal endémico grave profundamente arraigada en el Perú, donde desde hace tres siglos de dominio colonial, el oro y la plata de la sierra peruana fue enviada a España; y en el año 1821, después de una larga guerra que dejó devastado a nuestro país, fue declarado una república independiente; sin embargo los sueños no duraron mucho, pues con la construcción de ferrocarriles y la explotaciones de sus riquezas recién descubiertas-guano, salitre y caucho- el país vio cómo su patrimonio fue dilapidado por la corrupción.

El tema de la corrupción está presente en todos los ámbitos de la sociedad en los que nos desarrollamos, tal es así que los niveles de corrupción no sólo afectan la dimensión institucional del Estado, sino que el Perú pierde al año unos 3 mil millones de dólares debido a la corrupción, dinero que bien pudo haber sido destinado a obras de infraestructura, saneamiento, construcción de hospitales o colegios. Sin embargo, la corrupción y abuso de los funcionarios que ostentan el poder, toman decisiones que conllevan a pérdidas millonarias que afectan a todos los ciudadanos.

Como puede apreciarse, la corrupción atenta contra una de las condiciones necesarias de la vida en sociedad: la confianza recíproca entre los ciudadanos y el pueblo, debido a lo imprevisible del comportamiento de éstos. Este sentimiento de desconfianza de la sociedad hacia las instituciones del Estado quiebra las bases del contrato social y crea un ambiente de desestructuración social.

De plano, todo este panorama donde los actos de corrupción de los de cuello blanco o los de saco y corbata, que realizan algunos funcionarios, tales como congresistas, alcaldes, Ministros etc. están a la orden del día. Así tenemos que por ejemplo, entre los años 2005 y 2014, Odebrecht pagó e hizo que se efectuaran pagos corruptos por la suma aproximada de \$29 millones de dólares, o como recientemente ha ocurrido una crisis en todo el sistema que administra justicia, en donde se ha ofrecido y recepcionado sobornos a cambio de una sentencia favorable para el interesado, mientras que por otro lado, Fiscales reciben dinero a cambio de renunciar a la persecución del delito, etc., lleva a que los legisladores hayan creído conveniente modificar el artículo 41° de la Constitución Política del Perú mediante la Ley N° 30650. En dicha modificatoria se dispuso que los delitos más graves contra la Administración Pública o el patrimonio del Estado serían imprescriptibles, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los particulares, ya que consideran que la prescripción actúa como un incentivo para los funcionarios y particulares corruptos, pues la impunidad es una consecuencia que traería consigo el haber cometido un delito contra la administración Pública, debido que al ostentar grandes cargos, tendrían la posibilidad de dilatar y manejar a su antojo la investigación iniciada en su contra, o esconderse por el periodo de tiempo que habilita el Código Penal al Ministerio Público para la persecución del delito.

Bajo este contexto la imprescriptibilidad de los delitos de contra la Administración Pública tiene como propósito, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; ya que busca proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general, el cual se encuentra fundamentado en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación (artículo 44° de la Constitución); así como, en el carácter democrático del Estado peruano (artículo 43°) y a su vez, en vigilar que los funcionarios y trabajadores públicos realmente estén al servicio de la nación (artículo 39°).



El legislador ve en la imprescriptibilidad en los delitos de corrupción, como una herramienta necesaria para la lucha contra la impunidad, debido a las nuevas exigencias que emergen de la realidad peruana. El motivo por el cual el legislador optó por ésta figura es porque considera que, no sólo involucra un daño económico, sino que también vulnera derechos fundamentales, es decir que considera proporcional la medida adoptada, en base a que la corrupción se encuentra estrechamente vinculada con la violación de derechos humanos, siendo pieza clave para comprender la infinita búsqueda de justicia y represión de los delitos contra la Administración Pública que atentan tanto contra los intereses del pueblo como los de cada ciudadano.

Si bien muchos ven a esta nueva figura como la medida idónea para la lucha contra la corrupción, otros la ven como atentatoria contra la dignidad humana, por cuanto un error de la persona genera una persecución de por vida, y de otro lado consideran que atenta también con el plazo razonable y que incluso es un mecanismo para que los casos de corrupción no sean terminados, afectando la celeridad procesal que es la encargada de dar una pronta y no muy lejana sanción al delito cometido.

En ese sentido ante la disparidad de criterios, resulta apreciable que se dejó de lado la regulación y explicación de qué sucederá cuando dichos delitos sean cometidos por particulares que tenga responsabilidad penal restringida; pues al indicar el artículo 41° de la carta magna que cuando se traten de delitos graves cometidos en contra de la Administración Pública o en contra del patrimonio del Estado, sean funcionarios o servidores públicos como particulares, los delitos no prescribirán; es decir, que cuando el imputado sea una persona de 18 a menos de 21 años de edad, o mayor de 65 años de edad, haría inviable lo regulado en el artículo 81° del Código Penal, sobre la reducción de plazos a la mitad por tener tal condición, llevando ello a que resulte necesario analizar dicha contradicción para así establecer una aproximación en cuál sería el plazo de prescripción de la acción penal de estas personas, al estar inmersos en dicha figura, la cual siempre se ha considerado como una atenuante desde un punto de vista bio-psíquico y social del llamado adolescente mayor que oscila entre los 18 y 21 años y los mayores de 65 años, y que tiene como finalidad la disminución del tiempo de persecución de delito como también de la pena a imponer.

## **1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN**

Como ya se ha mencionado la lucha contra la corrupción ha encontrado en la imprescriptibilidad, la solución para que los delitos contra la Administración Pública no queden impunes; no teniendo ahora el Ministerio Público ningún límite de tiempo para perseguir dichos delitos, aún en el caso de los particulares que al momento de los hechos no se encontraban en su capacidad plena de comprensión; ya que la prescripción permitiría que muchos funcionarios en los que el Estado ha confiado, puedan evadir la justicia sin ninguna consecuencia, creándose una desazón entre los ciudadanos. Sin embargo cuando se modifica una institución de tanta importancia como la prescripción, se tiene que analizar todos los aspectos en los que se puede llegar a aplicar dicha variación, así como que no se contradiga con otras disposiciones reguladas en el cuerpo normativo.

Es por ello que en este trabajo da cuenta de estos aspectos, explorando las contradicciones surgidas a partir de la disposición de imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública con la figura de la responsabilidad penal restringida regulada a través del artículo 81 del Código Penal, y la reducción de plazos prescriptorios que ella trae consigo; así como analizando si se debería consignar en el artículo 80 del Código Penal in fine que la imprescriptibilidad es inaplicable en las personas con responsabilidad penal restringida.

En el desarrollo de la investigación se ha tenido en cuenta por un lado que la corrupción es un problema grave y que su mayor reproche recae en la vulneración de derechos fundamentales

que aquella genera, lo que ha traído como consecuencia que los delitos en contra de la Administración Pública o contra el patrimonio del Estado sean imprescriptibles; y por otro lado la finalidad del artículo 81° del Código Penal, y la naturaleza jurídica de la responsabilidad penal restringida, ya que hasta el momento no se ha precisado cual es la situación de las personas con responsabilidad restringida al momento de incurrir en un delito imprescriptible. Por lo que todo ello llevará a determinar si dicha imprescriptibilidad es aplicable o no a las personas con responsabilidad restringida para así llenar el vacío legal que por el momento existe y no vulnerar los derechos de los imputados que gozan de dicha atenuante.

### **1.3. OBJETIVOS**

#### **1.3.1. Objetivo General**

Determinar si la imprescriptibilidad de los delitos que prevé el artículo 41 de la Constitución Política del Estado convierte en inaplicable la reducción de los plazos prescriptorios que señala el artículo 81 del Código Penal

#### **1.3.2. Objetivos Específicos**

- Analizar si se debe consignar en el artículo 80 del Código Penal parte in fine que la imprescriptibilidad es inaplicable en las personas con responsabilidad penal restringida.

### **1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**

El presente Proyecto De Tesis se delimita al análisis de la aplicación de la figura jurídica de la imprescriptibilidad de los delitos contra la Administración Pública en los casos en que el agente cuente con responsabilidad restringida y le corresponda una reducción de los plazos prescriptorios, en el Perú.

## **CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO**

### **2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN**

❖ Montes (2017) en su trabajo de tesis “LA IMPRESCRIPTIBILIDAD EN LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN”, concluye que: La corrupción en nuestro país es un fenómeno amplio. Que existen dos tipos: la primera denominada como “menuda”, que aflige a los ciudadanos en su trato diario con el Estado, y un segundo tipo “corporativa”, que es aquella cometida en las más altas esferas del poder. Asimismo concluye que la corrupción casi nunca fue indagada con integridad y eficacia. Que la justicia ha demostrado, una y otra vez, que no está lista para enfrentar a fuertes ni a fenómenos de criminalidad compleja; y que la promulgación de la imprescriptibilidad reducirá de manera sustancial la comisión de los Delitos Contra la Administración Pública en nuestro país.

❖ Pereyra Villar (2017), en un artículo publicado sobre LA LEY QUE ESTABLECE IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN, anotó que Cesar Landa Arroyo, considera que la imprescriptibilidad resulta idónea para optimizar los principios y valores que se persiguen, ya que la prescripción del delito actúa como incentivo para los funcionarios corruptos. Esto debido a que cree que la impunidad será la única consecuencia que traiga consigo el hecho de haber cometido delitos de corrupción si es que el funcionario dilata las investigaciones o se esconde por el periodo de tiempo que solicita el Código Penal para la prescripción de la acción penal. asimismo indica, esta medida no erradicará la corrupción en su totalidad, ya que no solo se requieren políticas anticorrupción sino también un cambio de mentalidad, la imprescriptibilidad constituye un importante avance en la lucha contra la corrupción”.

❖ Salgado (2016) en su trabajo de tesis “EL JUICIO PENAL EN AUSENCIA DEL PROCESADO Y LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN PENAL COMO MEDIDAS EFECTIVAS PARA REDUCIR LA IMPUNIDAD EN LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” realizado en Quito, al tener como objetivo si existe un congruencia entre los principios fundamentales que se han establecido en la constitución de Ecuador y las excepciones establecidas para algunos delitos contra la Administración Pública; mediante un análisis estadístico en una población de 36 funcionarios judiciales; concluye que, la existencia del juicio penal en ausencia del procesado así como la imprescriptibilidad de la acción, no son medidas vinculadas con un Estado garantista y de mínima intervención penal, cómo se es el Ecuador, pues no se ha comprobado que exista una verdadera necesidad para su aplicación en los delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.

### **2.2. BASES TEÓRICAS**

#### **2.2.1. REDUCCION DE PLAZOS PRESCRITORIOS**

El artículo 81° del Código Penal establece que los plazos prescriptorios se reducen a la mitad, en los delitos en los que sus autores son menores de veintiún años o mayores de sesenta y cinco años al momento de cometerse, por considerarlo de responsabilidad restringida.

La culpabilidad restringida, es en realidad una atenuación de la responsabilidad penal que se encuentra establecido genéricamente en el artículo 22 del Código Penal, y que de manera específica el legislador penal lo tuvo en cuenta para establecer el tiempo de prescripción de la acción penal en casos de ciertos sujetos por la calidad de su edad. (JULCA & BARRENECHEA, 2010).

### 2.2.2. RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA

El artículo 22° del Código Penal reconoce única y exclusivamente, como indicador cuantitativo para la reducción prudencial de la pena a imponer, la edad del agente, esto es que tenga entre dieciocho o menos de veinticinco o supere los sesenta y cinco años.

La imputabilidad disminuida como también la suelen llamar ciertos autores, constituye una categoría que el legislador español había previsto, desde 1848, en un sistema original de circunstancias que eximían o atenuaban la pena, ya que dichas circunstancias cuando no reunían todos los requisitos exigidos por la ley eran consideradas como circunstancias de atenuación. Esta técnica, fue adaptada en el código de 1863 y en el de 1924, debiendo recalcarse que en nuestros Códigos de 1863, de inspiración española, reconocía la existencia de estados intermedios entre la enfermedad y la salud mental, asignándoles la calidad de circunstancias de atenuación.

Por otro lado se tiene que, cuando otros legisladores, comprendieron la necesidad de diferenciar de manera clara la categoría de los delincuentes, que al momento de cometer la infracción, no eran en un cien por ciento imputables; surge la noción de “imputabilidad disminuida”. El artículo 14 del anteproyecto Suizo de 1915, el cual fue base del Código Penal Peruano de 1924, señalaba: “si a causa de una perturbación en su salud mental o en su conciencia, o a causa de su desarrollo mental incompleto, el delincuente, en el momento de obrar, no poseía la facultad de apreciar el carácter delictuoso de su acto o de determinarse a esta apreciación, el juez atenuará libremente la pena”.

En lo que respecta a lo señalado en el anteproyecto Suizo de 1915, ello fue aceptado implícitamente por el legislador peruano, al señalar en el artículo 90 del Código Penal de 1924 que: “en los casos del artículo 85, cuando no concurren los requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente la responsabilidad, el Juez podrá disminuir la pena hasta límites inferiores al mínimo legal”, por lo que se puede decir que en términos material ello ha sido dispuesto en el artículo 21 del Código de 1991.

Los sujetos con limitada imputabilidad son capaces de obrar culpablemente y pueden ser castigados igual que los autores considerados como imputables; no obstante, el juez según los mencionado líneas arriba debe tener en consideración que su capacidad de resistir a los impulsos delictuosos es mucho más débil que la de las personas que tienen han alcanzado su madurez mental (POZO, 2005).

De todo ello se colige que la responsabilidad restringida, no significa semiimputabilidad si no que significa una culpabilidad atenuada, que el agente se encuentra en pleno desarrollo de su capacidad psíquica, es decir que su capacidad de comprensión es menor y mayor su inestabilidad impulsiva, por lo que por dicha condición su capacidad de imputabilidad sería restringida.

### 2.2.3. LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DELITO

La regla general, en la persecución del delito es que toda acción penal debe prescribir por efecto del tiempo, sin que el Estado, haya iniciado o no haya sentenciado dentro del plazo establecido por ley. Esto se debe a que en nuestro sistema penal el *ius puniendi* del Estado tiene límites temporales, esto es, no puede ejercerse ad infinitum. Por otro lado, la imprescriptibilidad de un delito, es la excepción a esta regla, la cual implica la inexistencia de un plazo que permita la extinción de la acción penal o de la pena por el transcurso del tiempo (INGA ZACARIAS, 2016).

“Los delitos imprescriptibles son los que atentan contra los derechos humanos, y no importa el transcurso del tiempo, porque la persecución penal no se extingue con la finalidad de evitar su impunidad” (ALFARO, 2008). Así, en nuestro país, conforme a la Resolución Legislativa

N° 27998, publicada el 12 de junio de 2013, la imprescriptibilidad sólo operaba para los casos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, esto por cuanto el Estado peruano se ha adherido a la Convención adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968, para los crímenes que consagra la convención con posterioridad a su entrada en vigor para el Perú.

Estos delitos no prescriben porque poseen también una pretensión preventiva general para evitar futuros delitos contra expectativas normativas que protegen el mantenimiento incólume de los derechos humanos e impedir su impunidad. Tanto los derechos humanos, así como valores esenciales y básicos en el desarrollo integral de la humanidad, tienen como fundamento su desarrollo integral y el reconocimiento del hombre con derechos inviolables en su libertad, en su integridad y en su dignidad. (ALFARO, 2008).

Esta regla de imprescriptibilidad excepcional, conforme lo ha expuesto el Tribunal Constitucional, no tiene vigencia en el ordenamiento jurídico peruano como consecuencia de la entrada en vigor de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (9 de noviembre de 2003), sino que surge en virtud de una norma imperativa de derecho internacional general que, como ha sostenido la Corte Interamericana, no nace de la referida Convención, sino que está reconocida en ella (Cfr. Caso La Cantuta vs. Perú, Sentencia del 29 de noviembre de 2006, párrafo 225)”

En estos casos, el fundamento de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad radica en el derecho a la verdad. Así lo ha dejado sentado el Tribunal Constitucional cuando afirma que es “parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la verdad, el que los crímenes de lesa humanidad resulten imprescriptibles” (ÁVALOS, 2017).

Con la modificatoria del artículo 41° de la Constitución, mediante la ley N° 30650 del 20 de agosto de 2017, se añadió a la lista de los delitos imprescriptibles, los delitos cometidos en contra de la Administración Pública o contra el patrimonio del Estado, pues fue una iniciativa legislativa, que busca combatir la corrupción en nuestro país. Tal es así, que en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013–2018 se destaca la relación que existe entre la corrupción y la seguridad ciudadana. Incluso, el Tribunal Constitucional refiriéndose a los delitos de corrupción, expone que la Constitución no consagra únicamente derechos fundamentales; sino que también protege otros bienes constitucionales que son igualmente valiosos, entre ellos, los principios de persecución y sanción del delito, así como el principio de no impunidad ; asimismo, reconoce el principio constitucional de proscripción de la corrupción, estableciendo que el proceso de lucha contra cualquier forma de corrupción -tanto aquellas vinculada al aparato estatal como las que coexisten en el ámbito de la sociedad civil- obliga a los clásicos poderes del Estado a tomar medidas constitucionales concretas a fin de fortalecer las instituciones democráticas, evitando con ello, un directo atentando contra el Estado.

Esta imprescriptibilidad también se encuentra regulada en varias legislaciones de países, a manera de ejemplo y siguiendo a BURGOA, tenemos a Alemania, que prevé la imprescriptibilidad de la acción para los casos de homicidio agravado; Austria, que prevé la imprescriptibilidad de los delitos cuando estos estén sancionados con cadena perpetua o penas privativas de libertad mayores a 20 años; y Ecuador, Venezuela y Bolivia han incorporado la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios o contra el Patrimonio Del Estado y el Tráfico Ilícito de Drogas. Esa experiencia ha sido tomada como base para la dación de la ley analizada en este trabajo, demostrando que la regla de la prescripción no es un dogma inmodificable, ya que determinadas excepciones, relacionados a la gravedad del delito cometido, pueden ser incorporadas.

## 2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS

❖ **Acción penal.-** Poder jurídico mediante cuyo ejercicio, a través de la puesta en conocimiento al órgano jurisdiccional de una noticia criminal, se solicita la apertura o la aprobación formal de proceso penal, haciendo surgir en aquel la misma mediante resolución motivada. (PEÑA CABRERA, 2013)

❖ **Administración Pública.-** La actividad administrativa de los órganos del Estado en todas sus escalas o jerarquías. La entidad que administra. Constituye función típica del poder Ejecutivo, nacional o provincial, y de los municipios. Sus actividades son las que regula el Derecho Administrativo (OSSORIO, 1998).

❖ **Derechos Fundamentales.-** Son las prerrogativas conferidas por la Constitución Política a los ciudadanos con la finalidad que puedan ejercer las libertades en ellas reconocidas, con los alcances y límites, tanto para el titular del Derecho como para el Estado, que la Carta Fundamental o la Ley de Desarrollo fija como protección a los valores supremos empezando por la dignidad humana como eje fundamental de este sistema de valores reconocido como fundamento del orden constitucional y democrático (LUJAN, 2013).

❖ **Funcionario Público.-** Quien desempeña alguna de las funciones públicas. Órgano o persona que pone en ejercicio el poder público (OSSORIO, 1998).

❖ **Servidor Público.-** Es el denominado empleado público, que es la persona técnica o profesional que presta su actividad para la realización de los fines de interés público, cumpliéndolos de hecho o ayudando a su realización, a cambio de ciertos derechos exigibles a la administración (PEÑA CABRERA FREYRE, 2008).

❖ **Plazo razonable.-** Principio integrante del debido proceso por el cual se establece que cualquier procedimiento o proceso judicial debe realizarse dentro del tiempo absolutamente indispensable para emitir una decisión legítima y debida, siempre que se asegure el ejercicio regular del derecho a la defensa de quien es atacado y el derecho de contradecir de quien incoa la causa, en todo caso teniendo como referencia el tiempo que la ley haya previsto para la realización del trámite, de procedimiento o de proceso. (LUJAN, 2013, pág. 194)

❖ **Prescripción en el Derecho Penal.-** consiste en la extinción de la responsabilidad por el transcurso del tiempo; este es un factor determinante para no fijar la sanción penal o el cumplimiento de la pena. (PEÑA CABRERA, 2013, pág. 1084)

## **2.4. MARCO REFERENCIAL**

### **2.4.1. ACCION PENAL**

#### **2.4.1.1. Concepto y alcance de la acción penal**

La acción penal es, en la doctrina moderna más generalizada y admitida, el poder Jurídico de excitar la actuación jurisdiccional a fin de que el juzgador se pronuncie acerca de la punibilidad de hechos que el titular que aquella reputa constitutivos de delito. Así pues, se puede decir que es el medio para hacer actuable la pretensión punitiva del Estado, quien en lugar de proceder directamente al castigo del culpable, hace depender su aplicación del resultado de un proceso jurisdiccional, donde la defensa del inculcado se halla garantizada.

Por otro lado, SEBASTIAN SOLER, es del concepto que “la accion penal no es más que el momento dinámico de una pretension punitiva preexistente y estatica, puesta en movimiento por la comisión de un hecho delictuoso. Producido este la amenaza genérica de una pena se pone en relación con un sujeto determinado, por medio de la actividad de una serie de órganos, tendientes a producir, en los hechos, la consecuencia amenazada, esto es, la pena”.

GIOVANNI, expresa : “con el termino accion penal podemos entender tanto el derecho de provocar una decision juridica acerca de una determinada notitia criminis, como el acto o conjunto de actos a traves de los cuales se hace valer a tal derecho”. Eso quiere decir, que debe entenderse a la accion penal como derecho subjetivo y coo actividad, en otros términos como inicio y como ejercicio. El inicio corresponde el acto o actos conjuntos de actos llevados a cabo dirigidos a hacer converger el proceso hacia la decisión definitiva: los actos de ejercicio de la acción penal se denominan tambien actos de prosecución de la acción penal, de tal modo, la accion penal vista como actividad y conjunto de actividades, recorre un camino que coincide con el recorrido por la relación procesal y concluye en la sentencia irrevocable. La acción domina y da carácter a todo el proceso: lo inicia y lo hace evaluar hasta su meta (la sentencia)”. En resumen se puede decir que la accion penal es la energia que anima todo el proceso; por eso, el proceso, sin el ejercicio de la acción penal, no puede surgir ni continuar.

En tal virtud, se puede conceptualizar la acción penal como el poder jurídico mediante cuyo ejercicio, a traves de la puesta de conocimiento al órgano jurisdiccional de una noticia criminal, se solicita la apertura o la aprobación formal del proceso penal, haciendo nacer en aquel la obligación de pronunciarse sobre la misma mediante resolución motivada.

Este poder juridico es común en el ejercicio de la acción penal el Ministerio Público y, en su caso, de la víctima. Menciona DE LA OLIVA, que ese poder jurídico está, cuando lo ejerce el Ministerio Público, íntimamente relacionado con sus funciones públicas que ha de realizar imperativamente; mientras que en los casos de ejercicio de la acción privada, es decir por particulares, pueden hacerlo libremente, ese poder jurídico es la sustancia de un derecho subjetivo disponible.

#### **2.4.1.2. Caracteres de la acción penal**

##### **a. Publicidad**

La publicidad es el primero de los caracteres de la acción penal. Esta es pública, tal como la describe el artículo 1º del Código Procesal Penal Peruano del 2004-en adelante CPP-, porque está dirigida a satisfacer un interés colectivo, general, de que el orden social perturbado por el delito sea debidamente restaurado. Así pues, la acción penal está por encima de los intereses individuales. (URTECHO BENITES, 2007)



## **b. Oficialidad**

Este principio refiere que la persecución penal de un hecho punible constituye un deber constitucional de un órgano público. Y no es necesario que persona alguna lo impulse<sup>12</sup>. En nuestro país este deber le corresponde al Ministerio Público quien es el titular del ejercicio de la acción penal (art. 159.5 Const.).

Para GIOVANNI, “La oficialidad se identifica con la publicidad, al paso que ella no quiere expresar más que el deber del Ministerio Público, así que le sea llegada la *notitia criminis*, de iniciar de oficio la acción penal, es decir sin que necesite ninguna orden, estímulo e iniciativa de otro órgano o sujeto. Es evidente, por tanto que para poner en movimiento la iniciativa del Ministerio Público, es suficiente cualquier información”. “En una palabra-agrega LEONE- la oficialidad es la obligación del Ministerio Público de promover por su propia iniciativa la acción penal.

La oficialidad consiste en que la acción penal debe iniciarse de oficio cuando el órgano competente del estado, es decir el Ministerio Público, haya tomado conocimiento de un suceso criminal, con o sin la cooperación del afectado o de otro particular.

La excepción a este principio de oficialidad lo constituyen los delitos privados, en los que el agraviado es el único que puede accionar a través de una querrela ya que el Ministerio Público no interviene en ninguna fase del proceso. Pues estos delitos se consideran de menor gravedad que los delitos públicos y es por ello que el afectado no solo debe promover sino también proseguir su querrela.

## **c. Obligatoriedad o Legalidad**

Este principio refiere a que cuando el Ministerio Público toma conocimiento de un suceso criminal, se encuentra en la obligación de intervenir, es decir inicial la acción penal, y cumplir con todos los actos que conlleven a la formación del proceso penal.

Para algunos autores denominan a este principio con el de legalidad, pues el Ministerio Público como defensor de la legalidad, al tomar conocimiento de un hecho que revista las características de un delito conforme a ley, está en la obligación de ejercer acción penal. Según GOMEZ ORBANEJA, “el punto de vista del Ministerio Público ha de ser el de la ley, ya que es un órgano público en función de la justicia, y no de la administración política o de la razón de estado”.

El Ministerio Público se encuentra obligado a ejercer acción penal cuando la noticia criminal tenga indicios reveladores de que se encuentra ante un delito, ello de acuerdo al artículo 336 de CPP donde precisa que se dispondrá la formalización y continuación de la investigación preparatoria cuando “...aparecen indicios o elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito.”

## **d. Irrevocabilidad**

Este principio refiere que en el proceso penal, no se acepta que este pueda concluirse a través de acuerdos particulares entre el ofendido y el ofensor, pues esta es una facultad que ninguno de los dos tiene sobre el derecho de penar le incumbe al Estado. Entonces una vez ejercida la acción penal esta no se puede suspenderse interrumpirse o extinguirse por convenio de la partes o por desistimiento del agraviado.

Las partes no pueden disponer para la culminación del proceso penal, pues la acción penal debe conducir al proceso hasta la sentencia o absolución del imputado. “El derecho

de penar, que al estado incumbe, no puede estar subordinado al desistimiento del actor, porque sería tanto como convertir al acusador en árbitro del proceso penal”<sup>21</sup>.

Dentro de las excepciones a este principio de irrevocabilidad de la acción penal, encontramos al principio de oportunidad consagrado en el art. 2 el CPP, donde el fiscal se abstendrá de ejercer la acción penal o el juez dictara auto de enjuiciamiento. Asimismo en los delitos de acción privada pues si opera el desistimiento o renuncia que pueda hacer el agraviado.

#### **e. Indivisibilidad**

Este principio refiere que la acción penal debe ser puesta en movimiento para todos los que participaron del mismo hecho delictivo. El profesor argentino SEBASTIAN SOLER, anota que este carácter es natural resultado de la necesidad social de perseguir a todos los responsables de un hecho delictuoso y no solamente a uno o algunos de ellos.

Entonces el Ministerio Público debe iniciar acción penal sobre todos aquellos que participaron del mismo hecho delictuoso, no puede ejercerse solo contra algunos y reservarse para otros, sino que se debe actuar con objetividad alcanzando todas las responsabilidades de quienes merecen ser sancionados por el ilícito penal cometido.

### **2.4.1.3. Ejercicio, renuncia y extinción de la acción penal**

#### **a. Ejercicio de la acción penal**

La acción penal, en la mayoría de los casos, es de carácter público. Se ejerce exclusivamente por el Ministerio Público en los delitos públicos. Pero también la ley ordinaria permite que el agraviado o su representante la ejerza en los delitos privados. En ambos casos expresa un poder jurídico, que tratándose del Ministerio público se erige en un deber cuando esta es legalmente procedente: tipicidad del hecho y causa probable, y, tratándose del ofendido importa el ejercicio de un derecho fundamental, que puede o no ejercer.

En el caso de las faltas, las cuales son un caso especial, no interviene el Ministerio Público; por lo que la acción penal puede iniciarse a instancia del ofendido o de oficio por el Juez de Paz, Letrado o no Letrado, a instancia de la autoridad policial.

#### **b. Renuncia de la acción Penal**

La acción penal por delito público no es renunciable por el sujeto pasivo del delito. Ésta sólo es renunciable en los delitos privados y en las faltas. En ambos casos la ley permite el desistimiento o la transacción del ofendido; renuncia que, como expresa ESCUSOL BARRA, importa la extinción de la acción penal.

#### **c. Extinción de la acción Penal**

El artículo 78 del Código Penal reconoce cuatro supuestos de extinción de la acción penal, sin interesar su naturaleza pública o privada o si es o no renunciable. Los supuestos son los siguientes: por muerte del imputado, prescripción, amnistía y la cosa juzgada. (SAN MARTIN CASTRO, 2003)

En los casos expuestos, como precisa VILLA STEIN, la ley reconoe varias razones que permiten extinguir la acción penal, en cuya virtud el Estado autolimita su potestad punitiva. Pueden ser causas naturales (muerte del infractor), criterios de pacificación o solución de conflictos sociales que tienen como base la seguridad jurídica (cosa juzgada y prescripción) o razones e carácter socio-políticas o de Estado (amnistía).

Explicado la acción penal, las características, ejercicio, y formas de extinción; corresponde analizar una de las figuras que resulta necesario explicar la prescripción de la acción penal, antes de ahondar en las instituciones principales de esta tesis.

## **2.4.2. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL**

### **2.4.2.1. Concepto.**

Por prescripción penal se entiende que transcurrido el plazo previsto en la ley penal, el Estado no puede llevar adelante la persecución penal pública derivada de la sospecha de que se ha cometido un hecho punible concreto, ni ejecutar una pena ya impuesta por la comprensión judicial de que un hecho punible fue perpetrado (PASTOR, 1993).

El Tribunal Constitucional señala a través de su jurisprudencia que: “la prescripción es aquella institución jurídica que, mediante el transcurso del tiempo, extingue la acción, dejando subsistente el derecho que le sirve de base, institución cuyo concepto es plenamente aplicable tanto en derecho público como en derecho privado, en el sentido que, si la ley otorga un plazo dentro del cual un particular o el Estado puede recurrir ante un órgano que tiene competencia para resolver un determinado petitorio y éste se vence, es imposible, por esa vía, obtener pronunciamiento alguno”<sup>1</sup>.

Dicho de otro modo, el TC señala que en una Norma Fundamental inspirada en el principio pro-hómine, la ley penal material otorga a la acción penal una función preventiva y resocializadora, en la cual el Estado autolimita su potestad punitiva; orientación que se funda en la necesidad de que, pasado cierto tiempo, se elimine toda incertidumbre jurídica y se abandone el castigo de quien lleva mucho tiempo viviendo honradamente, consagrando de esta manera el principio de seguridad jurídica (Prescripción Penal, 2010).

Un criterio similar al expuesto comparte la Corte Suprema: “La prescripción de la acción penal puede definirse como el transcurso del tiempo que extingue la persecución de un delito. No obstante, en un plano más técnico se le identifica como la pérdida, por parte del Estado, de la facultad de ejercitar en un caso en concreto el *ius puniendi*. Otros conceptos de prescripción aluden más bien a los efectos que aquella produce sobre la antijuricidad de un hecho punible y sobre la culpabilidad o responsabilidad de su autor, señalándose que aquella tendría la condición de circunstancia que invalida el delito y sus consecuencias”.<sup>2</sup>

Finalmente en cuanto a la prescripción podemos decir que, sus principales fundamentos teóricos según Román López, pueden ubicarse en cinco grupos: 1) razones de prevención general: la aplicación tardía de la pena pierde todo efecto ejemplificador, al generarse un olvido social del hecho con el paso del tiempo, es decir, se torna inútil; 2) razones de prevención especial: el paso del tiempo genera la presunción de buena conducta del sujeto, y por tanto, dado esa “resocialización”, la falta de aplicación de la pena; 3) razones institucionales: la desidia estatal para perseguir el delito deslegitima dicha persecución y la pena en sí misma; 4) razones procesales: el trascurso del tiempo vuelve dificultosa la producción de la prueba y torna imposible la construcción de la verdad histórica; y 5) razones humanas: fundadas en la dignidad de la persona que se ve afectada con un eventual encierro, por lo que el Estado debe reducir las posibilidades de afectar esa dignidad. (ROMÁN LÓPEZ, 2011)

---

<sup>1</sup> STC, Exp. N° 0008-1999-AI, FJ. 32.

<sup>2</sup> Acuerdo Plenario 8-2008/CJ-116 de 13 de noviembre de 2009. Voto singular de San Martín Castro, Prado Saldarriaga y Príncipe Trujillo

#### **2.4.2.2. Naturaleza jurídica**

El legislador peruano atribuye a la excepción de prescripción de la acción penal la naturaleza de carácter mixta, pues la ubicó tanto en el código penal, como en el código de Procedimientos Penales y Código Procesal Penal de 2004.

La prescripción como institución penal y procesal penal comprende tanto a la acción penal como a la pena. Conforme con la ley procesal procede deducir la excepción cuando por el transcurso del tiempo, conforme a los plazos señalados por el Código Penal, se extingue la acción o la pena.

Desde el punto de vista de la teoría de la doble naturaleza, que reconoce a esta institución naturaleza de derecho material como procesal, la regulación de la prescripción se integraría a los presupuestos de punibilidad, consecuentemente, no puede ser alterada retroactivamente en perjuicio del procesado (CACERES JULCA, 2010).

#### **2.4.2.3. El régimen de la prescripción de la acción penal**

La prescripción está recogida en la Constitución Política del Perú, en su artículo 139°, el mismo que establece: “los principios y derechos de la función jurisdiccional: La amnistía, el indulto y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada”.

En el artículo 78 del Código Penal se contempla varias causas que permiten extinguir la acción penal, en virtud de las cuales el Estado autolimita su potestad punitiva; estas razones pueden tener como fundamento causas naturales (muerte e infractor), criterios de pacificación o solución de conflictos basados en el principio de seguridad jurídica (cosa juzgada o prescripción) o razones socio políticas del Estado (amnistía).

En este caso, la prescripción constituye una causa de extinción de la acción penal, fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos, que se traduce en la renuncia del Estado al ius puniendi por cuanto éste no puede permanecer latente indefinidamente, suspendido en el tiempo ilimitadamente, eliminando así la forma de incertidumbre jurídica al descartar la posibilidad de perseguir un hecho criminal, más allá del plazo legalmente establecido como límite prescriptorio; operado por el transcurso del tiempo un efecto liberatorio, con relación a la prescripción penal.

##### **2.4.2.3.1. Los plazos de prescripción de la acción penal**

La prescripción de la acción penal, según la regulación establecida en nuestro Código Penal puede ser contabilizada a través del plazo ordinario y el plazo extraordinario.

##### **• Plazo ordinario de prescripción**

En concordancia a lo establecido en la ley penal material, la prescripción es un medio para liberarse de las consecuencias penales y civiles de una infracción penal o una condena penal por efecto del tiempo y en las condiciones exigidas por ley

Es regla general del instituto de la prescripción que requiere para su perfeccionamiento que el tiempo de la prescripción de la acción penal sea igual al máximo de la pena fijada por la ley penal para el delito en concreto. (CACERES JULCA, 2010)

En esa línea, el artículo 80 del Código Penal señala que el plazo ordinario, es el equivalente al máximo de la pena fijada en la ley, en caso de ser privativa de la libertad. En caso de que la pena no sea privativa de la libertad, la acción prescribe a los dos años. Asimismo en caso de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio de organismos sostenidos por éste, el plazo de la prescripción se duplica.

Cabe resaltar que, si bien la prescripción ordinaria se fija según cada delito, en términos generales, según lo señalado en el párrafo cuarto del artículo 80 del Código penal, no puede ser superior a veinte años.

#### **• Plazo extraordinario de prescripción**

Este tipo de prescripción exige para su configuración el cumplimiento de un plazo más el equivalente a una mitad del plazo ordinario, ya que, ha existido una causal para que se extienda a dicho plazo. (CACERES JULCA, 2010)

El artículo 83 del Código Penal señala, que cuando se interrumpe el plazo ordinario de prescripción, comienza a correr un nuevo plazo. Sin embargo, extraordinariamente, la acción prescribe indefectiblemente y en todos los casos cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad el plazo ordinario de prescripción.

#### **2.4.2.3.2. Reglas especiales de la prescripción de la acción**

##### **a. En el delito continuado**

La prescripción de la acción penal en los delitos continuados comienza desde el día en que terminó la actividad delictuosa

##### **b. En el delito instantáneo**

En estos delitos la prescripción de la acción penal comienza a partir del día en que se consumó. Así, en estos delitos, la infracción se consuma en el momento en que se produce el resultado o situación que describe la ley, sin que se determine la creación de una circunstancia antijurídica de efectos duraderos.

##### **c. En el delito permanente**

La prescripción de la acción penal en los delitos permanentes comienza a partir del día en que cesó la permanencia.

En el delito permanente, el resultado se mantiene por cierta duración, debido a la voluntad del autor. En dicho tiempo se sigue ejecutando, por la que la consumación se da cuando termine o abandone la situación antijurídica.

##### **d. Cuando se sanciona el delito con penas conminadas alternativas o conjuntas**

La prescripción de la acción penal sea por prescripción ordinaria o extraordinaria, sólo será posible cuando se hayan vencido paralela o secuencialmente, los diferentes plazos que correspondan a todas las penas alternativas o conjuntas (CACERES JULCA, 2010).

#### **2.4.2.4. Fundamento de la prescripción.**

ALBERTO BINDER, afirma que el límite temporal, impuesto al poder del Estado (solo es admisible ejercer poder penal dentro de un plazo), tiene como función garantizar que el *ius puniendi*, no sea utilizado más allá de los límites de la seguridad social. Siendo mejor presumir que el tiempo ha restaurado ese orden social, en lugar de otorgarle al Estado un poder penal ilimitado, ya que de lo que se trata es de buscar el modo cómo en un Estado de Derecho se busca fundamento al límite temporal.

La prescripción tiene varios fundamentos, todos ellos de política legislativa. En ese sentido, SOLER señala que son: el simple transcurso del tiempo, la desaparición de los

rastros y efectos del delito, la presunción de buena conducta, el olvido social del hecho, etc. URTECHO BENITES, menciona que en nuestro derecho vemos funcionar como base del sistema, según el artículo 83°, un doble motivo, el primero de ellos, es el transcurso del tiempo y el segundo, la conducta observada por el sujeto, pues de cometer nuevo delito doloso se interrumpirá (pérdida de todo el tiempo ganado por el autor o partícipe del delito) el plazo de prescripción, al igual que los actos procesales vinculados al delito.

El profesor MIXÁN MASS, señala que lo esencial de la prescripción radica en la autolimitación que el estado asume. La autolimitación que el Estado asume genera un deber jurídico frente al justiciable, y, relativamente genera al derecho a éste para oponerse a la pretensión de someterlo al ius puniendi. El procesado tiene como fundamento el argumento de haberse liberado de la persecución penal o de la ejecución de la pena, en razón de que el tiempo transcurrido ha traspasado el límite previsto.

Por su parte ROY FREYRRE, nos presenta la siguiente síntesis enumerativa, en el subtítulo fundamentos afirmativos y negativos, de su obra “causas de extinción de la acción penal y pena”:

*“la doctrina dominante y la legislación contemporánea están acordes en sostener la convivencia social de la prescripción. Esta tesis afirmativa se inspira en alguna o algunas de las siguientes enunciaciones: a) la sociedad olvida paulativamente el delito hasta el extremo que su recuerdo mismo desaparece; b) la aplicación tardía de la pena carece de eficacia o ejemplaridad; c) el transcurso del tiempo tiene la oportunidad de corregir a un autor o partícipe de un delito; d) La legitimidad de la persecución y la conveniencia de ejecutar la pena son canceladas por el simple transcurrir del tiempo mediante el cual el ius puniendi no logra su objetivo debido a la negligencia de los órganos estatales; e) El tiempo hace que los medios de prueba se debiliten o desaparezcan”.*

*“... En lo que concierne a las ideas que se apoyan en la tesis negativa de la prescripción penal tenemos, entre otras, las siguientes: a) contradice los principios del derecho penal desde que importa una esperanza de impunidad que alienta a la comisión de delitos; b) delimita el efecto intimidatorio de la amenaza penal y de la pena; c) Se opone al principio fundamental de que ningún delito debe quedar impune; d) constituye un premio a los delincuentes más hábiles que han logrado eludir la acción de la justicia, así como un castigo a la incuria de jueces y fiscales; e) su fundamento en el simple transcurrir del tiempo no puede afectar el carácter penalmente de la culpabilidad”.*

## **2.4.3. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

### **2.4.3.1. Delitos contra la Administración Pública**

Los delitos contra la administración pública están contemplados en el Título XVIII del Código Penal. El legislador ha precisado y centrado todo un título para tales ilícitos penales, el mismo que comprende los delitos cometidos tanto para funcionarios como por particulares que llegan a afectar, ya sea en grado de lesión o en peligro, el bien jurídico administración pública. De este modo, nuestro Código Penal es transmisor de la política criminal del Estado en materia de delitos funcionariales y ajusta sus contenidos de tipicidad en base a una temática de gran trascendencia para el Estado Peruano.

Estos delitos como es obvio entender, afectan a un punto de engarce entre el estado y la sociedad. Así, la administración pública es un punto intermedio entre el Estado y la

sociedad, en tanto esta última es destinatario de las funciones y servicios. La importancia de la Administración Pública es grande, si esta no existe simplemente no hay Estado (VARGAS, 2017).

### 2.4.3.2. Clasificación de los delitos contra la Administración Pública

Nuestro código penal vigente, siguiendo el esquema del Código penal Italiano de 1930, que reproduce el de 1889, hace uso de un sistema general de clasificación de los delitos contra la administración pública atendiendo a si quien lo comete es un particular o un funcionario público. Tal es así que los delitos contra la administración pública en el Código Penal peruano están sistemáticamente regulados en el Título XVIII en dos capítulos:

- Capítulo I, Delitos cometidos por particulares ( desde el artículo 361° al 375° )
- Capítulo II, Delitos cometidos por funcionarios públicos ( desde el artículo 376° al 401°-B )

En este esquema general, cada capítulo se subdivide a su vez en secciones específicas, en las que se clasifican los delitos en razón a la naturaleza de cada delito.

En el Capítulo I del Título XVIII se detalla una serie de delitos comunes que llegan a lesionar o poner en peligro el bien jurídico genérico administración pública, los que a su vez se agrupan en tres secciones (ver cuadro N° 1)

<b>Cuadro N° 1</b> <b>DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMETIDOS POR PARTICULARES</b>	
A. Usurpación de autoridad, títulos y honores	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usurpación de funciones o mando militar ( artículo 361°)</li> <li>• Ostentación indebida de función, grado académico, título profesional u honores (artículo 362°)</li> <li>• Ejercicio ilegal de la profesión (artículo 363°)</li> <li>• Suscripción indebida de trabajo otorgada por profesional (artículo 364°)</li> </ul>
B. Violencia y resistencia a la autoridad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atentado-coacción contra autoridad, funcionario o servidor público (artículo 365°)</li> <li>• Atentado-coacción contra funcionario o su asistente (artículo 366°)</li> <li>• Atentado- coacción agravada (artículo 367°)</li> <li>• Desobediencia o resistencia a la autoridad (artículo 368°)</li> <li>• Ingreso indebido de quipos o sistema de comunicación, fotografía y/o filmación en centros de detención o reclusión (artículo</li> </ul>



	<p>368-A°)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingreso indebido de componentes con fines de elaboración de equipos de elaboración de equipos de comunicación en centros de reclusión (artículo 368-B°)</li> <li>• Sabotaje de los equipos de seguridad y de comunicación en establecimientos penitenciarios (artículo 368°-C)</li> <li>• Posesión indebida de teléfonos celulares o, armas, municiones o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos en establecimientos penitenciarios (artículo 368°-D)</li> <li>• Ingreso indebido de armas, municiones o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos en establecimientos penitenciarios (artículo 368°-E)</li> <li>• Violación de fueros de autoridad (artículo 369°)</li> <li>• Violación de distintivos policiales (artículo 370°)</li> <li>• Incumplimiento de deberes procesales (artículo 371°)</li> <li>• Violación de medios de prueba (artículo 371°)</li> </ul>
C. Desacato	El rubro delictivo de desacato, que contenía dos especies de delictivas, ha quedado únicamente, por efecto de la ley N° 27975 del 29 de mayo del 2003 (que derogó el artículo 374° que regulaba el desacato ofensivo), con el tipo de desacato mediante desorden (artículo 375°)

Fuente: Tabla 1 Delitos contra la Administración cometido por particulares (Fidel Rojas Vargas-2017)

En capítulo II del Título XVIII, que reúne los delitos cometidos por funcionarios públicos se halla estructurado en base a cuatro secciones. (Ver cuadro N° 2)

<b>CUADRO N° 2</b>  <b>DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS</b>	
A. Abuso de autoridad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abuso Genérico de autoridad (Artículo 376°)</li> <li>• Abuso de autoridad condicionado ilegalmente la entrega de bienes y servicios (Artículos 376-A)</li> <li>• Otorgamiento ilegítimo de bienes de derechos (Artículos 376-B)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales (Artículos 377)</li> <li>• Delito de denegación o deficiente apoyo policial (artículo 378°)</li> <li>• Requerimiento ilegal de la fuerza pública (artículo 379°)</li> <li>• Abandono de cargo (artículo 380°)</li> <li>• Nombramientos ilegales (artículo 381°)</li> </ul>
B. Concusión	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Concusión propia (artículo 382°)</li> <li>• Exacción ilegal (artículo 383°)</li> <li>• Colusión simple o agravada (artículo 384°)</li> <li>• Patrocinio ilegal de intereses particulares (artículo 385°)</li> <li>• Extensión de punibilidad a particulares (artículo 386°)</li> </ul>
C. Peculado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peculado doloso básico o simple (artículo 387° primer párrafo)</li> <li>• Peculado doloso agravado por la cuantía (artículo 387° segundo párrafo)</li> <li>• Peculado doloso agravado por el destino de los bienes (artículo 387° tercer párrafo)</li> <li>• Peculado culposo básico (artículo 387° cuarto párrafo)</li> <li>• Peculado culposo agravado (artículo 387° quinto párrafo in fine)</li> <li>• Peculado de uso (artículo 388°)</li> <li>• Malversación de fondos básicos o simple (artículo 389° primer párrafo)</li> <li>• Malversación de fondos agravada (artículo 389° segundo párrafo)</li> <li>• Demora injustificada de pagos (artículo 390)</li> <li>• Rehusamiento de la entrega de bienes a la autoridad (artículo 391°)</li> <li>• Peculado y malversación extensiva o impropia (artículo 392°)</li> </ul>
D. Corrupción de funcionarios	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cohecho pasivo propio (artículo 393°)</li> <li>• Cohecho pasivo internacional (artículo 393-A°)</li> <li>• Cohecho pasivo impropio (artículo 394°)</li> <li>• Cohecho pasivo propio específico (artículo 395°)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cohecho pasivo propio policial (artículo 395-A°)</li> <li>• Cohecho pasivo impropio policial (artículo 395°-B)</li> <li>• Cohecho pasivo específico de secretario o auxiliar de justicia (artículo 396°)</li> <li>• Cohecho activo genérico (artículo 397°)</li> <li>• Cohecho activo trasnacional (artículo 397°-A)</li> <li>• Cohecho activo específico (artículo 398°)</li> <li>• Cohecho activo policial (artículo 398°A primer párrafo)</li> <li>• Cohecho activo policial propio (artículo 398°-A primer párrafo)</li> <li>• Cohecho activo policial impropio (artículo 398°-A segundo párrafo)</li> <li>• Negociación incompatible o aprovechamiento indebido (artículo 399°)</li> <li>• Tráfico de influencias (artículo 400°)</li> <li>• Enriquecimiento ilícito(401° )</li> </ul>
--	--

Fuente: Tabla 2 Delitos Contra La Administración Pública Cometidos Por Funcionarios (Fidel Rojas Vargas-2017)

Como podrá apreciarse, existen algunas incongruencias en las clasificaciones que contiene el Código Penal, sobre todo en la inclusión de los tipos penales de tráfico de influencias y los tipos penales de cohecho activo en el capítulo reservado a los delitos cometidos por funcionarios públicos, en la medida que dichos delitos pueden ser cometidos por cualquier persona y no restrictivamente por un funcionario o servidores público.

En tal sentido, se colige que necesariamente cualquier acto de corrupción tiene que estar en vinculación con la actividad estatal donde se desempeña el sujeto activo. Esto es, que todas las figuras delictivas situadas en el Título XVIII tienen como bien jurídico común la “correcta función pública”, y más concretamente los principios esenciales a cada una de las actividades prestadas por el Estado, dentro del marco de un Estado Social y Democrático de Derecho (Reátegui Sánchez, 2009).

#### 2.4.3.3. El bien jurídico protegido

En doctrina penal existen diversas posiciones en torno a cuál sería el bien jurídico general protegido por los delitos contra la administración pública. Así, es posible identificar las siguientes posturas:

- **La probidad, dignidad, integridad, rectitud y lealtad del funcionario público.** Como puede entenderse, se trata de una concepción subjetiva respecto del bien jurídico, ya que se centra en características que el funcionario público debe tener para trabajar en la administración pública.

- **Las expectativas, basadas en las normas, que se tienen respecto de la actuación de los funcionarios estatales y aquellas sobre el rol que estos deben cumplir en nuestro sistema social.** En otras palabras, las expectativas normativas se defraudan cuando los

funcionarios públicos incumplen su deber institucional de “sujeción a la ley”; es decir, no actúan según las normas estatales prescritas (REAÑO PESCHIERA, 2009).

• **El correcto y regular funcionamiento de la administración pública (el correcto ejercicio de la función pública).** Esta postura predomina, actualmente, en la doctrina y en la jurisprudencia.

El presente trabajo adopta la postura de acuerdo con la cual el bien jurídico de relevancia penal en los delitos del Título XVIII Código Penal, es el “correcto y regular funcionamiento de la administración pública”. Sin embargo, este concepto es difuso y amplio, por lo que requiere ser analizado con mayor profundidad.

En la Administración Pública y la función pública del Estado, una correcta gestión pública se desprende de los principios y valores propios de la Constitución de una sociedad, la misma que debe apuntar a un sistema social equitativo, justo y democrático. En ese sentido, el bien jurídico “correcto y regular funcionamiento de la administración pública” debe ser entendido como la objetiva, legal y prestacional administración o gestión del conjunto de bienes y servicios que el Estado utiliza para el cumplimiento de sus fines constitucionales (MONTAÑA VIVANCO, 2015)

En otras palabras, el bien jurídico en los delitos contra la administración pública, es el desempeño correcto de los deberes y funciones que los servidores, funcionarios y empleados públicos asumen o se les delega con la finalidad de administrar al Estado (MEINI, 2008).

Ahora, el bien jurídico “correcto funcionamiento de la administración pública” es supraindividual, es decir:

- Su titularidad es compartida por la sociedad en su conjunto.
- Es indisponible por un sujeto privado. Por esta razón, será ineficaz el consentimiento respecto de la lesión o puesta en peligro del bien jurídico en cuestión (VÁSQUEZ-PORTOMENE SEIJAS).

En ese sentido, la Administración Pública es el bien jurídico genérico protegido en todos los delitos que la lesionan o colocan en peligro. Con el estudio de cada delito contra la administración pública (abuso de autoridad, peculado, cohecho, etc.) se apreciará, por tanto, la lesión o puesta en peligro del bien jurídico genérico *administración pública*, entendido también como se ha indicado líneas arriba, como el correcto ejercicio de las funciones y servicios públicos, pero también se podrá de manifiesto la afectación de un interés específico que distingue a un delito funcional de otro. Así, en el peculado: la correcta administración del patrimonio público, en la malversación de fondos: la afirmación del principio de legalidad presupuestal, etc.

En tanto objeto de protección penal, la administración pública es un bien jurídico de naturaleza institucional, entendida esta por diferenciación con otros bienes de contenido personal o colectivo.

Finalmente, se tiene que señalar que la administración pública es concreta y da contenido al bien jurídico protegido, pero configura igualmente al titular del sujeto pasivo agraviado por el delito. Esta doble función constituye una singularidad en el espectro de los objetos de protección penal (VARGAS, 2017).

#### **2.4.3.4. Los Actores De Corrupción**

Los principales actores de la corrupción y su rol en la comisión de actos de corrupción en el sistema de justicia son (Judicial C. T., 2001):

**1. Los órganos de decisión política y ejecutiva:** Algunos mandos directivos encargados de diseñar, controlar y mantener las situaciones de irregularidad que propician los actos de corrupción.

**2. Los Magistrados Y Fiscales:** Determinados Jueces y Fiscales de toda jerarquía interna representan muchas veces funcionarios la jerarquía más alta en las redes de corrupción del sistema de justicia. Sus actos de corrupción consisten, mayoritariamente, en la venta de fallos, agilización o dilatación de los procesos judiciales y en las preferencias en los procesos (MUJICA, 2011). Los sobornos usualmente se manifiestan a través de viajes, favores sexuales (JURISTAS, 2003) y/o cursos de especialización.

**3. El personal auxiliar del Poder Judicial y el Ministerio Público:** Este grupo está compuesto por secretarios, relatorías, asistentes y técnicos, que se les vincula con la corrupción esencialmente mediante el tráfico de influencias (MUJICA, 2011) (vínculos de conexión con los magistrados y fiscales), pero también a través de la modificación de documentos y sobornos para ejercer presión en la dilación de procesos o en su agilización. En el fuero penal, los ambientes posibilitan una relación directa y libre con los abogados litigantes, facilitando los actos de corrupción. Por otro lado, existen fiscales y jueces que tienen el mal hábito de no redactar personalmente los dictámenes y resoluciones, sino que se limitan a firmar documentos presuntamente elaborados por el personal auxiliar. Estas prácticas llevan a pequeñas corruptelas facilitando la introducción de dictámenes fiscales y resoluciones judiciales originalmente redactadas por los abogados de las partes. También son conocidas las situaciones donde los técnicos auxiliares del Ministerio Público acuden a tomar la manifestación de personas citadas a los estudios de los abogados defensores del investigado. Posteriormente, estos técnicos auxiliares (luego de haber recibido un beneficio por parte del abogado defensor) informan al fiscal pertinente que dichas personas concurrieron a la sede del Ministerio Público. (Justicia., 2018)

**4. Las mesas de parte:** Están compuestas por diversos funcionarios o servidores públicos encargados de recibir los documentos dentro de un proceso o investigación. Constituyen el primer acceso a la estructura del sistema de justicia (Justicia., 2018). Su relación con la corrupción consiste en el tráfico de la documentación. También es frecuente el tráfico de información, ya sea adelantando decisiones judiciales o con la divulgación de información confidencial. Finalmente, existe un tráfico en la distribución de procesos en los juzgados.

**5. La Policía Nacional del Perú:** En su relación con el sistema judicial, se encuentran todos los miembros del cuerpo policial encargados de colaborar con la investigación fiscal. Con el Código de Procedimientos Penales, el nexo con la corrupción en la labor policial se encontraba principalmente en la redacción de los atestados policiales y ocultamiento de pruebas; y si bien con el Nuevo Código Procesal Penal esto ha cambiado relativamente, todavía se mantiene el vínculo entre la policía y la corrupción a través de la redacción y manipulación de pericias y el aprovechamiento de la condición de personal de seguridad de magistrados y fiscales para traficar con influencias. (JURISTAS, 2003)

**6. Los abogados:** Es un grupo integrado por diversos abogados, importantes o “al paso”. En la esfera más alta, tenemos las siguientes prácticas corruptas: acuerdos con estudios satélites de abogados (encargados de la parte “oscura” del litigio, esto es, activar las redes de corrupción); incorporación de antiguos magistrados y funcionarios públicos en el equipo de abogados con el objetivo de utilizar sus vínculos al interior del sistema de justicia; estrategias de “corpamiento” consistentes en ubicar letrados de su confianza en determinadas dependencias judiciales y fiscales; e incorporación de procuradores con vínculos en el sistema judicial. A ello se suma que estos estudios de abogados suelen utilizar los logros académicos de sus miembros como estrategias para “lavarse la cara”. (YON RUESTA, 2010)

En cuanto a los abogados “al paso”, es decir, aquellos que operan en las inmediaciones de los órganos de justicia, se ha podido determinar que dicho patrón de asentamiento está correlacionado con un conocimiento previo de los actores que se ubican dentro del órgano de justicia. Así, estos también integran redes de corrupción que ejercen, cotidianamente, estas prácticas. (MUJICA, 2011)

**7. El personal de ejecución de sentencias:** se despliega en el tratamiento y permanencia de los reos en la cárcel, específicamente en el sistema de calificaciones para internos procesados y sentenciados.

**8. Los litigantes:** se trata de personas representadas por los abogados

#### **2.4.3.5. Técnicas De Corrupción**

Las técnicas de corrupción son la muestra en el escenario práctico de los actos de corrupción. Es decir, son los mecanismos centrales de corrupción puestos en práctica continuamente por los actores. Ahora bien, tomando en cuenta las principales técnicas de corrupción de acuerdo a las “especialidades” de los actores ya mencionadas, procede enumerar brevemente las técnicas de corrupción más usuales en el sistema de justicia peruano (Judicial C. T., 2001):

- “Coimas”.
- Lobbies.
- Redes ilícitas.
- Acciones de “copamiento”.
- Redes de información.
- Estilos de prevalimiento; magistrados que aprovechan de su condición para extorsionar a otros operadores de justicia y a las partes del proceso.
- Intercambio de favores.
- Elaboración de borradores de dictámenes y resoluciones judiciales por parte de los abogados defensores.
- Vulnerabilidad en la situación laboral de los operadores de justicia (provisionalidad de los cargos, elecciones basadas en criterios subjetivos, discrecionalidad de los presidentes de las cortes judiciales para integrar salas y elegir magistrados suplentes, promociones no fundamentadas en la OCMA).
- Manejo arbitrario de la asignación de expedientes.
- Nepotismo.

#### **2.4.4. FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN EN EL PERÚ**

Instituciones internacionales como el Banco Mundial señalan que, recientemente, ha habido una especie de explosión en lo referente a las técnicas de medición de la corrupción. Estos nuevos mecanismos se concentrarían en crear indicadores sobre la base de encuestas de expertos y en medir, a través de encuestas aplicadas a empresas y a particulares, la magnitud de impacto de las irregularidades en la administración pública. Dicha institución también destaca el importante papel que, en los últimos años, han cobrado este tipo de datos de acuerdo a lo que ellos llaman revolución en la tecnología de la información.

En dichas encuestas se arroja como resultado que la corrupción ha tenido un constante incremento como uno de los principales problemas del país. Tal es así, que en 2010, la corrupción se erigía como el principal problema del Perú<sup>3</sup>. En el resultado de 2013, a través de la Encuesta Nacional sobre percepciones que se realiza cada dos años, desde el año 2003, se aprecia que la corrupción, a pesar de que ha sido desplazada por la delincuencia, ocupa el segundo lugar.

Asimismo, según la evaluación social, la corrupción de funcionarios es el principal problema que enfrenta el Estado y que impide lograr el desarrollo del país.

En conclusión, en los resultados de la encuesta, las instituciones “más corruptas” para la población son el Congreso de la República, la Policía Nacional del Perú y el Poder Judicial; justamente aquellas instituciones llamadas a tutelar las afectaciones de nuestros derechos producidas, entre otros, por actos de corrupción.

Cabe señalar que, resultados obtenidos por las mencionadas encuestas coinciden y se complementan con aquello vertido por las mediciones realizadas por las instituciones internacionales. Estos estudios se hacen de manera más focalizada y contrastando la situación de otros países de la región. Es así como, sobre la base de los resultados de una encuesta llevada a cabo en 2010<sup>4</sup> por Transparency International, se puede señalar que la población peruana tiene una persistente sensación de aumento progresivo del clima de corrupción en el país.

Todo ese panorama, analizado mediante las encuestas internacionales, demuestra que en este tercer milenio, la corrupción se ha convertido, en el medio en el que más acuden funcionarios y servidores públicos inescrupulosos, también los particulares, para obtener recursos económicos, poder, beneficios o ventajas diversas, generándose a partir de ello una contracultura que cínicamente postula al acceso a posiciones dominantes o de poder, violando las reglas de juego y los consensos nacionales, a efecto de satisfacer expectativas de lucro, poder o influencia. Esta contracultura de la corrupción generada en los centros de poder político se extiende y afecta a los sectores de la sociedad civil, la misma que adopta en determinados casos frente a ella una posición de crítica débil o cierta complacencia que se condensa con la frase “roban pero hacen obras”.

#### **2.4.5. EL DELITO DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS**

La última sección de los delitos contra la administración pública, agrupa una serie de conductas ilícitas cometidas por sujetos investidos de un deber funcional como por particulares, mediante actos de corrupción, por lo que se analizará dicho rubro jurídico.

---

<sup>3</sup> Disponible en: <http://es.scribd.com/doc/46759836/Sexta-Encuesta-Nacional-sobre-Corrupcion-2010>.  
Consulta:

<sup>4</sup> La encuesta completa se puede revisar en: <http://idehpucp.pucp.edu.pe/anticorrupcion/barometro-global/> Consulta: 07/04/13.



El vocablo “corrupción”, si bien es bastante expresivo de la realidad que se quiere describir, sin embargo, dada su pluralidad de significados y gran capacidad de abarcamiento, no es técnicamente el más idóneo para describir y encerrar en lo específico la serie de conductas desvaloradas jurídicamente que se recogen en el código Penal e imputables a los funcionarios y servidores públicos.

La corrupción puede abarcar todas las dimensiones del quehacer humano: el tráfico comercial, las relaciones de pareja, ámbito intelectual, religioso, relaciones laborales, los campos jurisdiccionales, gestión pública, etc. Así pues, al tratarse de una definición amplia se adopta la definición tomada por MONTTOYA VIVANCO, en el Manual sobre los delitos contra la Administración Pública: “la Corrupción es el abuso del poder político encargado (por elección, selección, nombramiento o designación) para obtener beneficios particulares (económicos o no) violando la norma en perjuicio del interés general o del interés público. Ahora bien, solo cuando se presentan en las esferas de competencia-en sentido amplio- de los funcionarios y servidores públicos se denomina cohecho. En ese sentido, es el cohecho una especie concreta de corrupción focalizada en atención a los comportamientos de los sujetos públicos que lesionan o ponen en peligro el bien jurídico tutelado del correcto funcionamiento de la administración pública y la imparcialidad como condición funcional de sus actos.

Por otro lado, el termino soborno, alude a una acción, también concreta, de contenido ilícito imputada a terceros, consistente en quebrar la resistencia del sujeto público o de un particular equiparado, mediante el uso de medios corruptores con el objeto prestaciones de contenido antijurídico, indebido o tendencioso. Tradicionalmente se ha hablado del delito de soborno para referirse con ello al cohecho activo. En sentido estricto, soborno se utiliza para referirse con él al medio corruptor puesto en acción (donativo, entrega, ventaja, promesa, presente, dádiva, etc.)

Por esas razones, es más adecuado utilizar el vocablo “cohecho”, ya que etimológicamente y semánticamente es lo que mejor condensa nuestra materia; no obstante, no es la única acción que puede ser cometida por los funcionarios públicos, se tiene en este rubro también a la negociación incompatible, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Ahora bien, Alberto Donna, se pregunta, ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito de corrupción de funcionarios públicos?; ¿Será verdaderamente el correcto funcionamiento de las instancias de la administración pública, o el principio de imparcialidad, lo que al final de cuentas le interesa proteger al legislador? Así pues tenemos en cuanto al delito de cohecho, que existe una postura jurisprudencial que indica que el bien jurídico penal es en sentido general, garantizar el correcto funcionamiento y prestigio de la Administración pública, y más específicamente asegurar el cumplimiento del principio de imparcialidad que debe guiar la conducta funcional del la moralidad y corrección que debe imperar en la administración pública. En consecuencia, respecto a éste punto tal como lo ha indicado el Tribunal constitucional, en reiterada jurisprudencia, en directa alusión al preámbulo de la Convención Interamericana contra la corrupción, y la justicia; así como contra el desarrollo integral de los pueblos (Exp. N° 12712008-HC/TC); es que puede afirmarse que los actos en los que los funcionarios públicos atentan contra el desempeño en el ejercicio de sus funciones atentan contra las bases mismas del Estado.

#### **2.4.6. IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN PENAL**

En la antigua y larga tradición histórica de la institución de la prescripción, hay quienes proclaman –en verdad, excepcionalmente–, la imprescriptibilidad, por lo menos de las acciones u omisiones con grave desvalor social y jurídico.

En este sentido, HORVTIZ LENNON, afirma que “aquellos hechos que, por su entidad y significación para la comunidad humana, no dejan de ser vivenciados como gravísimos por el transcurso del tiempo ni por sus protagonistas ni por los afectados ni, en fin, por la sociedad toda” no deben ni pueden beneficiarse con límites temporales para su persecución y sanción; “Más aún, cuando tales delitos son perpetrados en el seno de un aparato organizado de poder (paradigmáticamente, la estructura estatal), sus autores actúan contando con la impunidad de tales ilícitos, la que se expresa, en el caso de la prescripción, como omisión de la persecución penal por parte del mismo aparato de poder cuyos miembros cometieron los delitos” (HORVTIZ LENNON, 2006).

Se ha llegado a sostener que, en estos casos, el Derecho Penal no está legitimado para exigir la prescripción de las acciones emergentes de los delitos especialmente desvalorados; y que, por el contrario, si lo hiciese, sufriría un grave desmedro ético, pues consagraría una "norma fundante de auto-impunidad".

Según Transparencia Internacional, organismo que se encarga de la lucha contra la corrupción en el ámbito mundial, el Perú se encuentra en el puesto número 72 en el ranking de los países más corruptos del mundo<sup>5</sup>; mientras que en el plano interno, la percepción del ciudadano promedio es que nuestras instituciones son corruptas, y existe tolerancia del peruano con ciertas modalidades de corrupción.

Como se sabe, en el Perú la corrupción casi nunca fue investigada con seriedad y eficacia, por eso es que, el legislador encontró en la imprescriptibilidad la salida más viable en su lucha contra la corrupción. Ésta medida, está sustentada en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por el Perú mediante Resolución legislativa N°. 28357 del 6 de octubre de 2004; la cual busca prevenir, controlar y a este flagelo, un delito complejo que cada vez más enquistado en ciudadanos y naciones enteras, pues está claro que la idea de justicia aparece antes y por encima del criterio de seguridad jurídica.

##### **2.4.6.1. Antecedentes de la imprescriptibilidad en el Perú**

Luego de la caída del gobierno de Alberto Fujimori, específicamente desde el 2001, se empezó a promover la iniciativa de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción ha sido promovida en diversos espacios y momentos. Así tenemos que el grupo Iniciativa Nacional Anticorrupción, propuso como parte de la institucionalización de la lucha contra la corrupción la reforma de la normatividad y acción internacional, planteado de manera específica “la promoción de los principios de imprescriptibilidad” y jurisdicción internacional en materia de delitos contra la corrupción, “a efecto de que el transcurso del tiempo y la doble nacionalidad no se constituyan en supuestos justificativos de impunidad” (Anticorrupción, 2001).

En febrero del año 2004, en el gobierno de Alejandro Toledo, el presidente del Consejo de Ministros Carlos Ferrero, anunció una serie de medidas inmediatas para la lucha contra la corrupción entre la cual estacaba una propuesta de reforma constitucional, mediante la

---

<sup>5</sup> Discurso de Investidura del Presidente del Consejo de Ministros, señor Yehude Simon Munaro, ante el Congreso de la República. Una agenda de gobierno para que el Perú siga creciendo y reduciendo la pobreza. Lima, 6 de noviembre de 2008. En: [http://www.pcm.gob.pe/Prensa/ActividadesPCM/2008/Noviembre08/discurso\\_investidura\\_2008.pdf](http://www.pcm.gob.pe/Prensa/ActividadesPCM/2008/Noviembre08/discurso_investidura_2008.pdf)

cual se planteaba la enmienda del artículo 41 de la Carta Magna para que los delitos cometidos por funcionarios públicos contra el patrimonio del Estado sean imprescriptibles<sup>6</sup>. En el año 2006, el proyecto de plan Nacional de lucha contra la corrupción, mediante Decreto Supremo N° 004-2006-JUS, contempló la figura de la imprescriptibilidad; posteriormente en julio del 2007 la propuesta fue publicada en el diario oficial el Peruano. En la misma línea, en enero del año 2007, la Ministra de Justicia, María Zavala, presentó el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción y Ética Ciudadana.

En ese mismo año, en la apertura del año judicial, Távara Córdova, Presidente del Poder Judicial, propuso al Congreso de la República, “que instaure una regulación normativa en la que se reconozca que los delitos cometidos contra la Administración de Justicia – y también, aquellos realizados contra la Administración Pública - tengan el carácter de imprescriptibles”.

En el mes de enero del 2008, la jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), Carolina Lizárraga Houghton, pidió al Congreso promover una norma a favor de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción que afecten el patrimonio del Estado, para de esa manera tener más armas legales para enfrentar la corrupción que ocasiona pérdidas cuantiosas.

Finalmente, luego de más de 39 proyectos presentados en el Congreso de la República sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, se promulgó la ley 30650, donde se incorpora a la parte final del artículo 41 la imprescriptibilidad de dichos delitos.

#### **2.4.6.2. La imprescriptibilidad en la legislación comparada**

La gravedad de los delitos cometidos en contra de la administración y la suscripción del convenio de las Naciones Unidas contra ha llevado, a que los países reformen reformar el marco jurídico existente, incluido por cierto la propia Constitución Política, a fin de posibilitar la fórmula de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. por ejemplo podemos mencionar:

##### **2.4.6.2.1. Ecuador**

Ecuador ha tenido dos reformas constitucionales en los últimos 16 años y en ambas se estableció la imprescriptibilidad de los actos de corrupción.

En la primera aprobada, el 5 de junio de 1998, por la Asamblea Nacional Constituyente, señala que “los dignatarios elegidos por votación popular, los delegados o representantes o los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado y los funcionarios públicos en general, estarán sujetos a las sanciones establecidas por la comisión de delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles... Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aunque no tengan las calidades antes señaladas” (artículo 121 inciso segundo).

Estando a ello, y con el afán de adecuar su legislación preconstitucional a la Convención Interamericana contra la Corrupción, en su momento el Ministerio Público del Ecuador y la Contraloría General del Estado elaboraron un Proyecto de Reformas al Código Penal que contemplaba la incorporación al artículo 101 del código sustantivo, de la imprescriptibilidad de los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito.

La nueva Constitución, discutida por la Asamblea Constituyente y aprobada vía referéndum el 28 de septiembre del 2008, establece que “(artículo 233)... Las servidoras o

---

<sup>6</sup> [http://www.oas.org/juridico/spanish/per\\_res6.pdf](http://www.oas.org/juridico/spanish/per_res6.pdf)

servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas” (Ecuador, 2008).

#### **2.4.6.2.2. Venezuela**

La Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada el 20 de diciembre de 1999, establece en su Capítulo III Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia, Sección Tercera, en su artículo 271 que “... No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes. (...)” (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 2000)

#### **2.4.6.2.3. Bolivia**

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 dispone en su artículo 112 que: “Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad”. En el plano legislativo, en Bolivia existe la Ley N° 004, “Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas”, que modificó el art. 105 del Código penal boliviano disponiendo que: “No procederá la prescripción de la pena, bajo ninguna circunstancia, en delitos de Corrupción”; así también modificó el art. 29BIS del Código de Procedimiento Penal estableciendo que: “los delitos cometidos por servidoras o servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad” (Uruguay, 2014)

Por otro lado existen propuestas legislativas que postulan la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, como lo es:

#### **2.4.6.2.4. Argentina**

En dicho país, en julio de 1997, la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable a un proyecto de ley sobre ética pública, que planteaba la reforma de diversos artículos del Código Penal para incrementar las penas de los delitos existentes, incorporar nuevos tipos penales, e imponer la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción<sup>7</sup>.

En marzo del 2008, los diputados Nora Ginzburg, Marcelo Amenta, Christian Gribaudo y Julian Obligio presentaron el proyecto de ley Nro. 0821-D-2008 planteando la imprescriptibilidad de la acción penal cuando se tratare de “un delito cometido en fraude a la administración pública” y de los delitos de “cohecho y tráfico de influencias”, “malversación de caudales públicos”, “negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas”, “exacciones ilegales”, “enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados” y “prevaricato” (Uruguay, 2014).

#### **2.4.6.2.5. México**

En diciembre de 2007, el diputado Gerardo Vargas presentó un Proyecto de imprescriptibilidad de los delitos cometidos por servidores públicos y de creación del Observatorio Ciudadano contra la Corrupción. Así, vía la modificación al Código Penal Federal, planteaba la no

---

<sup>7</sup> <http://www.parlamentario.com/noticia-13729.html>

prescripción de los delitos de ejercicio indebido de servicio de servicio público, abuso de autoridad, desaparición forzada de personas, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito (Uruguay, 2014).

#### **2.4.6.3. Supuestos de agravados**

Existe un debate respecto a la determinación de los delitos que serían merecedores de la imprescriptibilidad. Por lo que es un rubro aún no cerrado. No obstante, se deberá tener en consideración que la determinación de los delitos que merecen un mayor reproche de cara a la prescripción, no es producto del azar. El artículo 41° de la Constitución cuales son los supuestos más graves de los delitos contra la Administración Pública o contra el patrimonio de Estado, que serán imprescriptibles, haciendo depender a los mismos del principio de legalidad, esto es que será la ley (código penal) quien determine taxativamente, a estos.

De este modo, cuando la propuesta legislativa hace referencia a que la imprescriptibilidad operaría en “los supuestos más graves, conforme al principio de legalidad”, debemos entender que estaría reservada solo a ciertos delitos; por lo que será en el Código Penal donde deberá precisarse cuáles serían éstos. No obstante, nos preguntamos ¿cuáles serán los criterios que deberá tener en consideración el legislador para tal precisión, acaso se remitirán a los tipos agravados o se guiarán por otros criterios? Tal vez debemos tener como referencia el Informe Nro. 1137-2007-CT-CS-PJ del Gabinete Técnico de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial, en el que se propuso adicionar un último párrafo al artículo 80 del Código Penal estableciendo la imprescriptibilidad de los delitos de concusión, peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito. (ÁVALOS, 2017)

Esta sería una señal, al menos, de lo que podría entenderse como “delitos agravados”. En esa línea el Proyecto de Ley N°. 01801/2007-CR proponía la imprescriptibilidad para los delitos de cohecho propio, cohecho impropio, corrupción pasiva, corrupción de auxiliares jurisdiccionales, aprovechamiento indebido del cargo y enriquecimiento ilícito.

Así pues, también se tiene el último proyecto de ley N° 3725-2018-CR, presentado el 13 de diciembre del 2018, en el que se propone modificar el artículo 80 del Código Penal de la siguiente manera: “El Plazo de prescripción de la acción penal se duplica en el caso de los delitos cometidos contra la administración pública o contra el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios como para los particulares. La acción penal es imprescriptible en los delitos previstos en los artículos 382° (concusión), 384°(colusión simple y agravada), 387° (Peculado), 389° (Malversación), 393° (cohecho pasivo propio), 393-A (soborno internacional pasivo), 394°(cohecho pasivo impropio), 395°( cohecho pasivo Específico), 396° (corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales), 397° (cohecho activo genérico), 397-A (cohecho activo Transnacional), 398° (cohecho activo específico), 399° (negociación incompatible), 400° (Tráfico de influencias), y 401(Enriquecimiento Ilícito), delitos cometidos como integrante de organizaciones criminales (ley 300776y delito de lavado de activos (Decreto Legislativo 1106 y modificaciones.

Como se sabe diversas legislaciones fueron previendo la no prescripción (imprescriptibilidad) de otros ilícitos específicos, como es en este caso la corrupción. En ese sentido, se tiene como ejemplo a Puerto rico y Uruguay; el primero de los mencionados ha establecido desde el 2004, en su Código Penal – teniendo en cuenta que no tienen Constitución propia – la no prescripción de los delitos contra el patrimonio del Estado.

Así, en el Art. 100 establece que “en los siguientes delitos la acción penal no prescribe: delito grave de primer grado, genocidio, crimen de lesa humanidad, asesinato, secuestro

y secuestro de menores, malversación de fondos públicos, falsificación de documentos públicos y todo delito grave tipificado en este Código o en ley especial cometido por un funcionario o empleado público en el desempeño de la función pública.”

De esta manera, Puerto Rico amplía el ámbito de la no prescripción a otro tipo de delitos cometidos por funcionarios públicos que no sean explícitamente definidos como corrupción. Según el Código Penal puertorriqueño, un delito grave es “aquel que conlleva una pena de reclusión mayor de seis meses”, los graves de primer grado tiene 99 años de prisión.

En el caso de Uruguay, mediante el proyecto de ley N° 2883 de 2014, se incorporó el artículo 117bis de su Código Penal: Artículo Único.- Incorpórese como artículo 117 bis del Código Penal, el siguiente:

"ARTÍCULO 117 bis. (Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en ejercicio de la función pública).- La acción penal será imprescriptible, para todos los que hubiesen participado en los delitos de: Peculado (Artículo 153); Peculado por aprovechamiento del error de otro (Artículo 155); Concusión (Artículo 156); Cohecho simple (Artículo 157); Cohecho calificado (Artículo 158); Soborno (Artículo 159); Fraude (Artículo 160); Conjunción del interés personal y del público (Artículo 161); Abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley (Artículo 162); Revelación de secretos (Artículo 163); previstos en el Código Penal; así como en todos los delitos que sean incorporados al Código Penal o por leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción ratificada por la Ley N° 17.008, de 15 de setiembre de 1998 y/o la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ratificada en Uruguay por la Ley N° 18.056, de 20 de noviembre de 2006. (Comisión de Constitución, 2014)

En resumen, la corrupción debe ser combatida eficazmente y como tal formar parte de la política criminal de nuestro país; por lo que el debate sigue pendiente sobre cuál será la posición que adoptará el legislador para regular los supuestos graves en los que se aplicará la imprescriptibilidad. En la actualidad, por razones de la competencia material y funcional, se considera graves a aquellos delitos que en su extremo mínimo superan los seis años de pena privativa de libertad. Se espera el legislador tome el criterio más idóneo para delimitar la lista de delitos a los que se aplicará la figura de la no prescripción.

## **2.4.7. REDUCCIÓN DE PLAZOS PRESCRIPTORIOS**

### **2.4.7.1. Definición**

Según esta institución los plazos prescriptorios se reducirán a la mitad, en los casos en lo que el agente al momento de cometer el hecho delictuoso tuviese más de dieciocho años de edad o menos de 21 años, o tenga más de sesenta y cinco años de edad, ello se debe a que el tratamiento de la responsabilidad restringida ha sido adoptado por el legislador no solo como una atenuante de la pena a imponer sino también en la reducción del tiempo de persecución del delito, ello en razón a la condición personal del procesado.

## **2.4.8. LA RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA**

### **2.4.8.1. Definición**

El sistema penal despliega sus efectos punitivos sólo respecto de quien ha alcanzado determinada edad y no padece graves perturbaciones que le impidan comprender la criminalidad de su acción y dirigir su conducta conforme a dicha comprensión. La configuración de la conducta delictiva exige un mínimo de capacidad de autodeterminación que el ordenamiento jurídico requiere para dar lugar a la responsabilidad jurídico penal. De manera que, cuando falta la capacidad de culpabilidad, el autor puede, ciertamente, actuar, pero no alcanzar la calidad de culpable, ya que el hecho no se vincula a una acción merecedora de reproche. Se debe mencionar que la imputabilidad es la capacidad del autor para comprender la criminalidad del acto y de dirigir sus acciones, o sea su capacidad para delinquir.

Algunos Autores definen a la imputabilidad disminuida de la siguiente manera:

SAVER: “La capacidad de la culpabilidad (imputabilidad) disminuida... existe cuando al estar enfermo de la mente disminuye notablemente en el momento del hecho la capacidad de percibir lo no permitido del hecho o de obrar con este conocimiento (...) la pregunta es si el hecho ha de imputarse al autor, si se le ha de hacer responsable por voluntad, solo puede ser, sin embargo afirmada o negada. En el caso de la imputabilidad disminuida es afirmada y se establece un grado más pequeño de culpabilidad” (RAMÍREZ, 1982)

MAURACH: “señala que en esta tesis no se trata de un caso “límite”, ni una duda si el autor es o no imputable, ni un grado intermedio entre la imputabilidad e inimputabilidad, sino de un caso en el de que el autor es imputable, pero para alcanzar el grado de conocimiento y dirección de un sujeto anímicamente normal, debe esforzar lo más su voluntad (PAVON VASCONSELOS, 2004)”

Otros autores como Morales (2008:128) sostienen que la imputabilidad disminuida solo puede entenderse como concepto compuesto, en el sentido de imputabilidad subsistente o reducción de la capacidad de culpabilidad. Al estar las capacidades tan solo limitadas y no ausentes, lo que cabe es una disminución del reproche.

Por otro lado tenemos estudiosos que atacaron la figura viéndola como ilógica, al considerar que ésta no puede disminuirse; ya que el sujeto es imputable o no lo es:

BELING: “Hay individuos cuyo poder de inhibición si bien no puede negarse cuantitativamente, es inferior en poder al normal, ya sea porque aún no lo es bastante, se por deficiencias patológicas, sea porque median estados fisiológicos que debilitan el poder de resistencia. También tales personas son plenamente imputables y plenamente responsables (es equivoca la designación de la imputabilidad disminuida, no hay grado de imputabilidad), solo que la medida de su culpabilidad por sus acciones es menor y por ello su punibilidad en parte la Ley aminora (...) y en parte, el juez, al fijar la pena debe hacerlo más relevante que en otros casos” (RAMÍREZ, 1982)

JIMENEZ DE USÚA: “Este sistema es absurdo, se somete a una pena disminuida a aquellos hombres que por no ser enteramente locos más peligrosos, por que resisten a los impulsos perversos menos que los hombres enteramente sanos, y saben escoger los medios y as ocasiones para lograr sus propósitos”

ZAFRONNI: “la imputabilidad disminuida es un supuesto de culpabilidad disminuida y no de una media imputabilidad.

Ahora bien, la capacidad de culpabilidad (imputabilidad) notablemente disminuida, de la que los citados autores han explicado, no es una forma autónoma de “semiimputabilidad” que se halla entre la imputabilidad y la inimputabilidad, sino un caso de imputabilidad, “pues el sujeto es (aún) capaz de comprender el injusto del hecho y de actuar conforme a esa comprensión. Sin embargo, la capacidad de control es un concepto graduable: a la persona le puede costar más o menos poderse motivar por la norma; se puede decir, que cuando aún existe capacidad de control, pero está sustancialmente reducida, por regla general se disminuye la culpabilidad”. (Claus, 1997)

En esa línea se tiene que la responsabilidad restringida o imputabilidad disminuida implica que el autor es capaz de entender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión pero, para lograr ese resultado, debe poner en práctica una fuerza de voluntad mucho mayor que un sujeto mentalmente normal.

La necesidad de compensar su menor capacidad de comprensión y su mayor inestabilidad impulsiva por la correspondiente tensión de sus fuerzas intelectuales-morales, es aplicada al sujeto que presenta una capacidad de imputación disminuida. En otras palabras, si este sucumbe al estímulo delictivo, es señal de que su capacidad de resistencia frente a los impulsos del *pathos* es la inferior a la normal. Esta carencia del poder determina una disminución de la reprochabilidad y, con ello, también una disminución del grado de culpabilidad. (REINHART MAUROCH, 1997)

En conclusión, podemos advertir que el agente con responsabilidad restringida es capaz de obrar culpablemente y puede, ser castigado igual que los autores considerados como imputables; en otras palabras, la imputabilidad disminuida debe necesariamente conducir a una disminución en el reproche jurídico penal; Sin embargo, el juez debe tener en consideración que por su capacidad de resistir a los impulsos criminales es más débil que la de los individuos que han alcanzado su madurez mental, por lo que ciertamente, si la capacidad de dirección o comprensión se halla disminuida también lo está la culpabilidad del sujeto y resulta por tanto justo atenuar la pena mediante un sistema que prevea una escala penal distinta, acorde a su culpabilidad. En otras palabras existe imputabilidad disminuida, cuando el sujeto aún es capaz de comprender la ilicitud de la conducta y determinarse de acuerdo a esa comprensión pero esa capacidad de comprensión y autodeterminación se encuentra disminuida en el momento de la comisión del delito.

#### **2.4.8.2. Responsabilidad restringida en el Perú**

El artículo 22° del Código Penal se erige en una eximente imperfecta radicada en la categoría de culpabilidad. El primer elemento sobre el que descansa el juicio de culpabilidad es la imputabilidad o capacidad de culpabilidad-condición previa o indispensable de la culpabilidad-. Esta tiene dos ámbitos: a) el sujeto debe alcanzar una edad determinada: dieciocho años; y b) el sujeto no debe padecer graves anomalías psíquicas, que eliminen el grado mínimo de capacidad de autodeterminación exigido por nuestro ordenamiento jurídico. Por razones de seguridad jurídica, nuestro legislador no solo fijó en dieciocho años la edad mínima para la capacidad de la culpabilidad (artículo 20 inciso 2), sino que además, como un concepto específico, estableció que cuando el agente tenga más de 18 años y menos de 21 años de edad, o más de sesenta y cinco años, al momento de realizar la infracción penal, corresponde la reducción prudencial de la pena.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Acuerdo Plenario N° 4-2016/CJ-116. Fundamento 9



### 2.4.8.3. Responsabilidad restringida en la Legislación comparada

#### a) Chile (Código Penal)

En el Código Penal Chileno, solo se regula en el artículo 10 las circunstancias que eximen de la responsabilidad penal, mas no lo que es una imputabilidad disminuida; por ello es que el autor Chileno Hernán SILVA SILVA, hace referencia en su obra Medicina legal y psiquiatria Forense, que en ninguna de las disposiciones del Código Chileno se regula al termino imputabilidad o a la falta de esta, que se configura en las causales de inimputabilidad y, por lo tanto las causales de responsabilidad criminal.

Por otra parte, explica que el Codigo Penal Chileno esta basado en doctrina clásica, siendo esta doctrina la que establece que el ser humano es imputable cuando actua de manera libre, voluntaria e inteligente; y que el libre albedrío permite adecuar si la conducata es ícita o ilícita.

#### b) México, Estado de Jalisco (Código Penal)

Es esta legislación la imputabilidad disminuida se encuentra regulada en el artículo 39°, el cual señala:

“artículo 39: en el caso de los sujetos con imputabilidad disminuida, el juez dispondrá de la medida de tratamiento que corresponda, en internamiento o libertad vigilada, así como las condiciones para asegurar a defensa social, considerando la peligrosidad del sujeto, considerando la peligrosidad del sujeto y las necesidades que se planteen en el curso de su tratamiento”<sup>9</sup>

SOTO ACOSTA, Federico, manifiesta que ése código adolece de grandes defectos, pues no define de manera concreta que es la imputabilidad disminuida, pero que por el contrario la acepta, pero no orienta sobre las circunstancias cuando se presenta. Asimismo indica este autor, que el legislador de Jalisco, solo pensó en la imputabilidad disminuida, en aquellos casos de conductas delictivas cometidas por personas mayores de 65 años, así como a los sujetos entre dieciocho y veinte años, tal como lo prescribe el artículo 41 del Código su Penal Fracción III, teniendo la facultad de disminuir en un tercio las penas que correspondan.

En la exposición de motivos del Código Penal de Jalisco, se hizo referencia a la imputabilidad disminuida de la siguiente manera:

*“la novedad que se propuso obedece a la regulación de la aplicación de medidas a personas en etapa de vejez, en una política criminal en la que se conjuga la adecuada defensa social con la protección de un sector de la población, que como en el caso de los menores, los ancianos son un grupo de personas con características particulares, desde el punto de vista bio-psicológico, que los coloca en una situación especial frente al derecho penal. Del mismo modo, que en materia de menores se ha desarrollado una política proteccionista, y promulgado leyes especiales, en tratándose de las personas que, al llegar a la última etapa de la vida, han incurrido en conductas tipificas penalmente como delitos, se consideró válido establecer un régimen especial, basados en la doctrina y en las prácticas en materia penal y penitenciaria en otros países”* (SOTO ACOSTA, 2006)

#### c) Panamá (Código Penal)

---

<sup>9</sup> Código Penal de Estado de Jalisco. Tomado de : <https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2015/03/C%C3%B3digo-Penal-para-el-Estado-Libre-y-Soberano-de-Jalisco.pdf>

En este país se encuentra regulada la imputabilidad disminuida en el artículo 25°, 26° y 27°:

“Artículo 25°: Actúa con imputabilidad disminuida quien en el momento de la acción u omisión, posea incompletamente la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho en razón de grave alteración de la conciencia.”

En cuanto a las medidas a imponer, en su artículo 112 de este código penal, se establece como medida de seguridad el destinar a los enfermos mentales, toxicómanos habituales, alcohólicos y a los sujetos de imputabilidad disminuida, al hospital psiquiátrico o a los establecimientos de tratamientos especiales o educativos.

#### **d) Bolivia (Código Penal)**

En esta legislación la figura que se viene analizando se encuentra regulada en el artículo 18, como semi-imputabilidad y establece:

“Artículo 18°: semi-imputabilidad: cuando los casos a que se refiere el artículo anterior no excluyan totalmente la capacidad de comprender o de querer del agente, si no que la disminuyan notablemente; el juez atenuará la pena conforme al artículo 39 o decretará la medida de seguridad más conveniente”<sup>10</sup>

#### **e) Francia (Código Penal)**

En esta legislación se trata a ésta figura como “vicio parcial de mente”, establecido en su artículo 89°:

Artículo 89°: “Quién en el momento de cometer el hecho estaba, por enfermedad, en tal estado mental que alterase grandemente sin excluirla, la capacidad de entender o de querer, responde del hecho cometido; pero la pena será atenuada”.

El régimen en estos casos se complementa con la aplicación de una medida de seguridad que consiste en la internación en una casa de corrección y custodia. Los sujetos pagan su culpa (pena) y después se curan (tratamiento).-También debe resaltarse que la mayoría de los autores coincidían en el carácter patológico que debía presentar el “vicio parcial” para ser incluido en esta figura, y por lo tanto quedan descartados para ello los motivos netamente psicológicos que pudieran generar la afección.

#### **f) Costa Rica (Código Penal)**

En su artículo 43 señala: imputabilidad disminuida

“Artículo 43.- se considera que actúa con imputabilidad disminuida quien, por efecto de las causas a que se refiere el artículo anterior, no posea sino incompletamente, en el momento de la acción u omisión, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o determinarse de acuerdo a la comprensión.”

#### **g) Venezuela (Código Penal)**

Artículo 62.- No es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos. Sin embargo, cuando el loco o demente hubiere ejecutado un hecho que equivalga en un cuerdo a un delito grave, el tribunal decretará la reclusión en uno los hospitales o establecimientos de reclusión del mismo tribunal. Si el delito no es grave o si no es el establecimiento adecuado, será entregado a su familia, bajo fianza de custodia, a menos que ella no quiera recibirlo.

---

<sup>10</sup> Código penal Boliviano, tomado de [https://www.oas.org/juridico/spanish/gapeco\\_sp\\_docs\\_bol1.pdf](https://www.oas.org/juridico/spanish/gapeco_sp_docs_bol1.pdf)

Artículo 63.- cuando el estado mental indicado en el anterior artículo sea tal que atenúe en alto grado la responsabilidad, sin excluirla totalmente, la pena establecida para el delito o falta se rebajará conforme a las siguientes reglas:

1. En el lugar de la de presidio, se aplicará la de prisión, disminuida entre dos tercios y la mitad.
2. En lugar de la prisión, se aplicará la de arresto, con la disminución indicada.
3. Las otras penas se aplicaran rebajadas por la mitad.

Artículo 69°.-imputabilidad disminuida. Cuando los estados de los que se trata en los artículos 62° y 63° no excluyan por completo la capacidad de comprender o de querer sino que la disminuyan de manera considerable, podrá el juez imponer unas penas atenuadas según la reglas del artículo 41° o aplicar la medida de seguridad contemplada en el artículo 120 y considerando siempre el grado de recuperación mental del agente.<sup>11</sup>

#### **h) Alemania (Código Penal)**

El Código Penal Alemán en su reforma de 1933, introduce por primera vez en su normativa esta cuestión, estando actualmente regulado en su Código de 1934 de la siguiente manera:

Artículo 20.- incapacidad de la culpabilidad por perturbaciones psíquicas

Actúa sin culpabilidad quien en la comisión de un hecho es incapaz por una perturbación psicológica, por perturbación profunda de la conciencia o por debilidad mental o por otra alteración grave de comprender lo injusto del hecho o actuar o de actuar de acuerdo a esa comprensión.

Artículo 21.- capacidad de culpabilidad disminuida

Si la capacidad del autor por las razones señaladas en el artículo 20 está considerablemente reducida en la comisión del hecho o para comprender lo injusto del hecho o para actuar con esa comprensión, entonces la pena puede ser disminuida conforme al artículo 49 inciso 1.

#### **i) Italia (Código Penal)**

La legislación italiana ofrece un claro ejemplo de imputabilidad disminuida y condicionada en razón de la edad. Así, existe presunción absoluta de inimputabilidad en favor del menor de 14 años. Para el mayor de 14 años y menor de 18, se atiende a si hubo capacidad de entender y de querer. Si las hubo y existe, pues, imputabilidad, la pena correspondiente sufre una atenuación. Desde luego, las medidas de seguridad no quedan excluidas en ninguna de las dos hipótesis (artículos 97 y 98 del Código Penal).

Se aprecia de lo analizado en cada legislación anotada; por un lado, que cuando han incluido esta figura en los Códigos Penales aparecieron diferentes formas de aplicación: la primera potestativa, dando al juzgador la posibilidad de operar una atenuación de la pena; y la segunda, obligatoria, operando la reducción por ley; y por otro lado que, han delimitado la figura de la imputabilidad disminuida, de una manera amplia en relación a la disminución de la capacidad que tiene el sujeto para comprender la ilicitud del hecho y a su capacidad de control, puesto que a la persona le puede costar más o menos poderse motivar por la norma, dejando así a criterio del Juez la reducción de la pena a imponer. Sin embargo hay países que han regulado esta

---

<sup>11</sup>Código penal de Venezuela, tomado de [https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3\\_ven\\_anexo6.pdf](https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ven_anexo6.pdf)

figura de una manera similar a la nuestra, es decir fijando de manera específica los parámetros en los que gira la imputabilidad disminuida-que en nuestro país adopta el *nomen iuris* de “responsabilidad restringida”-, en razón a la edad del sujeto activo al momento de comisión del delito; tal es el caso de la doctrina Mexicana, donde según el autor CARRANCA Y TRUJILLO, la edad – infancia, adolescencia, juventud y vejez- reviste importancia indudable para la imputabilidad penal. Este principio, se informa en la razonada convicción de que la falta de desarrollo psíquico, característica de la infancia, impide discernir el carácter antijurídico de la conducta e inhibir el impulso *delictivo*; mientras que, el imperfecto desarrollo psíquico del adolescente y la involución que se presenta en la vejez (al menos por regla general), han dado origen a ciertas concreciones de imputabilidad disminuida o condicionada, y a medidas de seguridad. (RAMÍREZ, 1982). Así también se tiene a España, donde el escenario es diferente, dado que en el capítulo II Aplicación de las penas, artículo 69º de su Código penal, establece.: “Al mayor de dieciocho años y menor de veintiuno que cometa un hecho delictivo, podrán aplicársele las disposiciones de la ley que regule la responsabilidad penal del menor en los casos y delitos de ésta pena”.

## **2.4.9. DERECHO A LA IGUALDAD**

### **2.4.9.1. Algunas precisiones conceptuales básicas**

Al emprender el tema de la igualdad desde una perspectiva constitucional, conviene empezar señalando que la conceptuamos en una doble dimensión: de un lado, como un principio rector de todo el ordenamiento jurídico del estado democrático de derecho, siendo un valor fundamental y una regla básica que éste debe garantizar y preservar. Y, de otro lado, como un derecho constitucional subjetivo, individualmente exigible, que confiere a toda persona el derecho de ser tratado con igualdad ante la ley y de no ser objeto de forma alguna de discriminación.

Lo anterior conlleva que si bien lo corriente es encontrar en los textos constitucionales un artículo expreso que consagra -de manera específica- el derecho de igualdad ante la ley y la prohibición de toda forma de discriminación, el principio de igualdad supone también un valor esencial y una regla que debe ser observada en el desarrollo legislativo y en la aplicación del conjunto de los derechos fundamentales que la Constitución recoge.

De todo ello coincidimos con GARCIA MORILLO, cuando califica al principio de igualdad como el prototipo de un derecho relacional, al señalar que:

"Es difícil, en efecto, concebir el derecho a la igualdad como un derecho autónomo, como es difícil pensar en una violación del derecho a la igualdad que no comporte, simultáneamente, la vulneración de otro derecho. Esto es así porque la específica naturaleza de la igualdad ante la ley exige que su transgresión se proyecte sobre algún campo material concreto; no se viola la igualdad en abstracto, sino en relación con –o más bien, en la regulación, ejecución o aplicación del acceso a los cargos públicos, la libertad de residencia, el derecho al trabajo o la tutela judicial efectiva, por sólo poner unos ejemplos”.

### **2.4.9.2. Contenido del derecho**

El derecho a la igualdad implica que todas las personas deben ser tratadas en forma igual por parte del Estado. Por ende, todo trato diferente está prohibido. El trato desigual de los iguales se conoce como discriminación.

Sin embargo, la realidad demuestra que existen una serie de desigualdades en la sociedad, lo que obliga a adoptar medidas orientadas a lograr que el derecho a la igualdad no

se agote en su reconocimiento formal (igualdad formal), sino que existan iguales oportunidades para el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de todas las personas (igualdad material). Estas medidas pueden implicar un trato desigual, lo que no es considerado como una discriminación sino una diferenciación. (HUERTA GUERRERO, 2003)

De ello se puede decir que:

- El derecho a la igualdad implica el trato igual entre los iguales.
- La discriminación implica un trato desigual entre los iguales.
- La diferenciación implica un trato desigual entre los desiguales

#### **2.4.9.3. Derecho a la igualdad en la constitución política de 1993**

El Artículo 2° inciso 2° de la Constitución del Perú de 1993 trata el tema del derecho a la igualdad de la siguiente forma:

Toda persona tiene derecho:

A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.

De allí se aprecia dos aspectos relacionados con el derecho a la igualdad: uno es el derecho a la igualdad ante la ley; y el segundo, la prohibición de discriminación.

El Tribunal Constitucional ha establecido respecto a este artículo que: *“contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal, estamos frente a un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino a ser tratado de igual modo a quienes se encuentran en una idéntica situación. Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable. Sin embargo, la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector de la organización del Estado social y democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos. Como tal, comporta que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales. la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable. La aplicación, pues, del principio de igualdad, no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables.” (STC 00009-2007-PI/TC, fundamento 20.<sup>12</sup>)*

Una aproximación inicial al tema de la igualdad nos puede llevar a especular que se trata de un principio fundamental reconocido por la Constitución, por el cual todos los individuos que formamos parte de una colectividad participamos de los mismos derechos y de las mismas obligaciones, y por lo tanto no podemos ser tratados desigualmente. Sin embargo, esa aproximación primaria es una verdad a medias. En la práctica, vemos que todos los individuos que participamos de esa colectividad no somos iguales y por ese motivo la legislación los trata de manera distinta. Por lo general, y aun cuando pueda parecer una contradicción, la legislación

---

<sup>12</sup> STC 00009-2007-PI/TC, fundamento 20)

distingue por razones de sexo, raza, condición económica, edad, capacidad civil, nacionalidad. Los menores de edad no pueden casarse sin autorización de sus padres o tutores, mientras que los adultos mayores de 18 años, no impedidos, pueden casarse libremente.

#### **2.4.9.4. Normas generales sobre la igualdad**

RUBIO CORREA, refiere en su libro estudio de la constitución política de 193, que La igualdad formal ante el derecho es una conquista de la revolución liberal de fines del siglo XVIII y que se consagra clásicamente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, la cual señala así:

“Artículo 1: Los hombres nacen libres e iguales en derechos; las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común”

Artículo 6: La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen el derecho de recurrir a su formación personalmente o por representante. Debe ser la misma para todos, lo mismo cuando proteja como cuando castigue. Siendo todos los ciudadanos iguales ante ella, son igualmente admisibles a todas las dignidades, cargos y empleos públicos, según su capacidad, sin otra distinción que la de su virtud o la de su talento.

#### **• Declaración Universal de Derechos Humanos**

##### **Artículo 1.-**

Todos los seres humano nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos a los otros”

Asimismo ante tantas desigualdades existentes en el mundo la declaración Universal añade:

##### **Artículo 2:**

“1.- toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

2.- Además, no se hará distinción alguna fundada en distinción política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”.

##### **Artículo 7:**

“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.”

Las mencionadas disposiciones ratifican que cada persona como parte de la humanidad, es igual a cada una de las demás.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Declaración Universal de los derechos Humanos, Tomado de:  
<https://www.humanium.org/es/derechos-humanos-1948/>

- **Pacto Internacional de derechos civiles y Políticos**

**Artículo 2:**

“cada uno de los estados partes en el presente pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentran en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de otra índole, origen nacional o social.

Del mismo modo, aquí en ese pacto también se establece el derecho a la igualdad ante la ley como un derecho específico de las personas y prohíbe la discriminación de la siguiente forma:

“Artículo 26: todas las personas son iguales ante la ley y tiene derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública, o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”<sup>14</sup>.

- **Declaración Americana de los derechos y deberes del Hombre, también establece la igualdad de las personas:**

Artículo II.-todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza. Sexo, idioma, credo ni otra alguna”.

Lo propio hace la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica:

- **Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica**

**Artículo 1:**

1.- los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otras índole, origen nacional o social posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social<sup>15</sup>.

En resumen, con diferentes aproximaciones, redacciones y grado de generalidad, todos los instrumentos internacionales con vigencia en el Perú que he transcrito, establecen las siguientes disposiciones, que por consiguiente, son exigible en nuestro país.

---

<sup>14</sup> Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tomado de:  
<https://www.coe.int/es/web/compass/the-international-covenant-on-civil-and-political-rights>

<sup>15</sup> Convención Americana de sobre Derechos Humanos e San José de Costa Rica. Tomada de:  
[https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n\\_Americana\\_sobre\\_Derechos\\_Humanos](https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos)

#### **2.4.9.5. Prohibición de la discriminación**

La prohibición de discriminación significa que ninguna autoridad estatal puede llevar a cabo un trato desigual entre las personas. No obstante, la prohibición de discriminación también puede ser entendida en un sentido más estricto, alusivo únicamente a la prohibición de llevar a cabo cualquier trato desigual que vulnere el ejercicio de los derechos fundamentales. En este último caso, la prohibición de discriminación siempre se analiza con relación a un derecho fundamental específico; lo que da lugar a que se afirme que el derecho a la igualdad es un "derecho relacional".

#### **2.4.9.6. Las formas de discriminación directa o indirecta.**

La discriminación directa se caracteriza porque el trato desigual se manifiesta de manera clara. Esto ocurriría, por ejemplo, si una norma establece que las mujeres no pueden votar.

Por otra parte, en la discriminación indirecta el trato desigual no se manifiesta de manera tan clara, lo que obliga a acudir a diferentes elementos adicionales para sustentar que existe un trato discriminatorio. Así por ejemplo, si una norma establece que para acceder a un trabajo se requiere una determinada estatura, se podría justificar su necesidad en los fines del empleo, pero a la vez podría argumentarse que con esa talla se discrimina a un importante sector de la sociedad.

#### **2.4.9.7. Discriminación y Diferenciación**

No todo trato diferenciado implica una discriminación. Pero, para que ese trato diferenciado no sea considerado como discriminatorio, debe analizarse si el mismo se encuentra justificado. Para llevar a cabo esta tarea, la doctrina y la jurisprudencia comparada han desarrollado una serie de lineamientos. Estos son:

- El trato diferenciado debe llevarse a cabo respecto a personas que se encuentran en una situación de desigualdad.
- El trato diferenciado debe sustentarse en un objetivo legítimo (principio de razonabilidad). Esto significa que la diferenciación debe basarse en causas o motivos objetivos y razonables. Estas causas o motivos pueden ser de diferente índole, no necesariamente relacionados con la necesidad de garantizar algún valor constitucional, sino orientados a enfrentar una situación de desigualdad.
- El trato diferenciado debe guardar una relación con el objetivo legítimo que se desea alcanzar (principio de racionalidad).
- El trato diferenciado debe aplicarse o llevarse a cabo en forma proporcional al objetivo legítimo que se desea alcanzar (principio de proporcionalidad).

Por lo tanto, si un trato diferenciado no reúne estas características estaremos ante una situación de discriminación, atentatoria del derecho a la igualdad. (HUERTA GUERRERO, 2003)

Ahora bien, la igualdad, por definición supone dos o más situaciones jurídicas, que son comparadas entre sí para determinar si se está produciendo un trato igual o desigual a las personas involucradas. Pero las personas pueden estar dentro de esta comparación, en dos posiciones cualitativamente distintas: o pueden tener una posición analógica, en el sentido de que es sustantivamente semejante, o pueden tener una situación diferente, que las hace desiguales no tanto en personas, sino en tanto sus circunstancias y características. Cuando estas diversidades corresponden a la naturaleza de las cosas, es razonable que el derecho establezca normas distintas.



El Tribunal Constitucional analiza la supuesta desigualdad cuando esta nace de la ley, determinado primero que si existe una causa objetiva y razonable que fundamente la no igualdad y, segundo, si dicha desigualdad está desprovista de una justificación también objetiva y razonable debiendo haber una relación de proporcionalidad entre medios y fin. Esta operación lógica es denominada, “el test de la razonabilidad”, donde lo fundamental es el examen dentro de la norma para encontrar las razones que puedan justificar la desigualdad y cuyo resultado se contrapone a otros valores constitucionales vigentes; es decir, la infracción al principio puede estar justificada si se ha preferido a otros principios del ordenamiento de superior jerarquía en la teoría de valores (COLOMA MARQUINA, 1991)

Asimismo tenemos que se viola el principio de igualdad en la aplicación de la ley, cuando el mismo precepto se aplica a casos iguales con notoria desigualdad por motivos arbitrarios, desigualdad que es sinónima para el Tribunal de conducta arbitraria. A diferencia del “test” que se aplica en los casos de desigualdad en la ley, donde la razonabilidad se mide en función de la propia norma, en la desigualdad por aplicación de la ley, ésta se mide respecto a la aplicación de la norma al caso concreto; así serán razonables las subnormas deducidas de la norma aplicable, de acuerdo a como fueron utilizadas. En este caso, para COLOMA MARQUINA, en el control de igualdad, lo fundamental para el órgano de defensa constitucional no es tanto la protección de la igualdad, sino plasmar una adecuada tutela judicial.

De ese modo se puede decir, que este derecho a la igualdad jurídica de trato en la ley y en su aplicación, no sólo no involucra una igualdad material; tampoco impide que se establezcan o reconozcan ciertas diferencias o desigualdades, a condición de que éstas no sean arbitrarias o irrazonables ya que -de tener dicho carácter- resultarían discriminatorias, supuesto éste que sí está vedado tanto a la ley como a su aplicación.

El punto crucial a esclarecer, entonces, es cuándo nos hallamos ante una diferenciación o ante un trato desigual admisible constitucionalmente y cuándo -por el contrario- ello configura una situación de discriminación que debe quedar proscrita.

Así tenemos, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aportado, a través de sus decisiones, algunos criterios de particular utilidad para esclarecer el problema que acabamos de plantear. Así, sostiene que:

a) El derecho a la igualdad de trato y la prohibición de toda forma de discriminación no debe entenderse como una proscripción al establecimiento de diferenciaciones de trato legítimas;

b) Una distinción resulta discriminatoria cuando carece de justificación objetiva y razonable, la que -a su vez- debe apreciarse y justificarse en relación con la finalidad y los efectos de la medida examinada;

e) Esta finalidad perseguida con el trato diferenciado no sólo debe resultar legítima, sino que debe respetar una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y los fines buscados;

d) Dado que el derecho a la igualdad protege a todos aquellos que se encuentran en una situación semejante o comparable, el trato distinto debe explicarse por la apreciación objetiva de situaciones de hecho esencialmente diferentes;

e) Por último, la existencia de ciertas categorías de personas o grupos que sufren limitaciones en algunos de sus derechos, por relaciones de sujeción o condiciones específicas de vulnerabilidad, torna admisible el establecimiento de un trato diferente.

Igualmente, el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos valora tres elementos en pie de igualdad, los cuales fueron señalados por RODRIGUEZ PIYERO, en su obra *Igualdad y Discriminación*:

"En primer lugar, los supuestos de hecho comparables, en los que existe una significativa proporción de elementos comunes, pese a que entre ellos pueda hallarse algún factor diferencial, cuya legitimidad debe enjuiciarse. El segundo punto sería la valoración de la razón de ser de la diferencia de tratamiento; en caso de ser positiva, quedaría justificado el tratamiento desigual. El tercer elemento es instrumental para realizar esa valoración; la razonabilidad de la causa alegada para justificar las diferencias de trato tiene que buscarse no sólo indagando sobre la no incompatibilidad con el ordenamiento jurídico de la razón de ser de la diferencia, sino también buscando la 'razonable' adecuación de la medida tomada en relación con los fines que se persiguen a través de ella (fines legítimos, en razón del segundo juicio)"

De todo ello se puede decir que, es deber tratar igual a lo que es igual, y tratar con desigualdad proporcional a lo que es desigual, tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos: "(...) por lo mismo que la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad, de dignidad y naturaleza de la persona es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferentes es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, a la dignidad humana(...). Existen, en efecto, ciertas desigualdades de tratamiento jurídico, sin que tales situaciones contraríen a la justicia (RUBIO CORREA, 1999).

En tal sentido, no habrá discriminación si una situación de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, sino conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón, o a la naturaleza de las cosas. De lo expuesto, no puede afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esta distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, las cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón, es decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que en alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana (O'DONELL, 1988).

## **2.5. Hipótesis**

### **2.5.1. Hipótesis General**

- La imprescriptibilidad de delitos contra la Administración Pública haría inviable la reducción de plazos prescriptorios, porque no tiene en consideración la responsabilidad restringida de las personas entre 18 y menos de 21 años de edad así como de las personas mayores de 65 años.

### **2.5.2. Hipótesis Específica**

- Se debería consignar en la parte in fine del artículo 80 del Código Penal que la imprescriptibilidad es inaplicable en las personas con responsabilidad restringida, teniendo en consideración que las personas de 18 a menos de 21 años de edad, no han alcanzado su madurez plena; mientras que en los mayores de 65 años de edad se inicia la disminución de sus facultades.

## CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

### 3.1. ENFOQUE

❖ **Cualitativo**; porque se busca explicar los motivos que hacen necesario el análisis de la de la reducción de plazos de los agentes con responsabilidad restringida a partir de la haberse incluido como imprescriptibles los delitos contra la Administración Pública.

### 3.2. DISEÑO:

❖ Es **descriptivo**, ya que se analizará y buscará información que permita desarrollar y reglamentar lo relacionado a la reducción de plazos prescriptorios en los delitos contra la Administración Pública al haberse incluido en el artículo 41° de la Constitución Política del Estado que dichos delitos son imprescriptibles, con la finalidad de presentar una adecuada tutela a los derechos de los sujetos con capacidad restringida y que así no exista una incompatibilidad entre ambas figuras. Además esta investigación, se basará en un **Diseño Documental**, el cual consiste en un proceso basado en la búsqueda, recuperación análisis, crítica e interpretación de datos, es decir los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales como son: impresas, audiovisuales o electrónicas.

### 3.3. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

#### Método:

❖ **Es Analítico**, pues, se divide intelectualmente el objeto de estudio para examinar y entender cada una de sus partes.

❖ **Inductivo**: Este método va lo particular a lo general; es decir analizado de forma independiente cada una de las partes del trabajo de investigación, se obtendrá de forma global, cuales son los efectos que implica la falta de regulación de la imprescriptibilidad en las personas con responsabilidad restringida.

❖ **Histórico**: su uso nos permitirá indagar y conocer los antecedentes del precepto a través de sus fuentes, lo cual nos permitirá conocer un poco más del origen y el devenir histórico del tratamiento normativo y jurisprudencial de la imprescriptibilidad y la responsabilidad restringida, en el ámbito nacional como internacional.

❖ **Sistemático**: Este método será utilizado en la presente investigación para analizar de una manera conjunta las leyes que estén relacionadas a esta investigación.

❖ **Teleológico o Ratio Legis**: Este método será utilizado en la presente investigación para identificar el espíritu de la normatividad vinculada a la investigación.

❖ **Hermenéutico Jurídico**: Se emplea con la finalidad de llegar a una interpretación clara de la norma penal respectiva y los principios que deriven de la misma, por ello estudiaremos las normas del Código Penal y las normas del Derecho Internacional referido al tema materia de investigación.

### 3.4. FUENTES, TÉCNICAS, E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

❖ **Fuentes Directas:** Código Penal; ley N° 30650 que establece la imprescriptibilidad de los delitos contra la Administración Pública o contra el Patrimonio del Estado, Doctrina, artículos jurídicos, publicados en Gaceta Jurídica, Actualidad Jurídica, Libros especializados, internet, notas periodísticas, entrevistas, entre otros.

❖ **Técnicas:** La técnica a emplearse será aquella que privilegie los documentos, a fin de analizar minuciosamente la información doctrinaria y legislativa sobre el tema objeto de investigación, las técnicas a emplearse son las siguientes:

**1. Fichaje:** a través del fichaje bibliográfico se compilará todo lo que se ha escrito directa o indirectamente sobre la reducción de plazos prescriptorios en relación a la responsabilidad restringida del agente en relación a la declaratoria de imprescriptibilidad de los delitos contra la Administración Pública, llegando a tener una postura respecto a la investigación.

**2. Recolección y Análisis de datos:** por medio de esta técnica se analizará minuciosamente la información doctrinaria y legislativa sobre el tema objeto de nuestra investigación.

**3. Procesamiento de información:** La información se procesará de acuerdo a los logros obtenidos mediante las técnicas, fuentes e instrumentos empleados para la recolección de la información.

**4. Análisis y presentación de datos y resultados:** Los datos obtenidos se analizarán detalladamente con la finalidad de dar validez a la hipótesis planteada.

### 3.5.ASPECTOS ÉTICOS

#### DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DE TRABAJO DE INVESTIGACION

Yo: **IRIS ISABEL CURAY NAVARRO** identificada con DNI N° **73228291**, en la condición de Estudiante Egresada, de la Facultad de **DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**, Escuela Profesional de **DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS** y domiciliado en **A.H. EL INDIÓ Mz. CH2 LOTE 28** Distrito de Piura, Provincia de Piura, Departamento de Piura, Celular: **937092724**, Email: **curayisabel2@gmail.com**.

**DECLARO BAJO JURAMENTO:** que la Tesis Titulada “LA IMPRESCRIPTIBILIDAD EN LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA” que presento a la Oficina Central de Investigación (OCIN), es original, no siendo copia parcial ni total de un trabajo de investigación desarrollado, y/o realizado en el Perú o en el Extranjero, en caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el Art. N° 411, del código Penal concordante con el Art. 32° de la Ley N° 27444, y Ley del Procedimiento Administrativo General y las Normas Legales de Protección a los Derechos de Autor. En fe de lo cual firmo la presente.



Piura Diciembre del 2018

  
DNI N° 73228291

Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Art. 4. Inciso 4.12 del Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales –RENATI Resolución de Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD

## **CAPÍTULO IV: PROBANZA DE LA HIPÓTESIS**

### **4.1. Probanza doctrinal -Jurídico**

#### **4.1.1. la imprescriptibilidad de los delitos que prevé el artículo 41 de la Constitución Política del Estado convierte en inaplicable la reducción de los plazos prescriptorios que señala el artículo 81 del Código Penal**

##### **1. Imprescriptibilidad:**

Según Cesar Landa la imprescriptibilidad, en aras de optimizar los artículos 44°, 43° y 37° y, teniendo como fundamento esencial la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad (artículo 1° de la Constitución), la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios es idónea. Que el vínculo de la corrupción con la violación de derechos humanos es clave para comprender el porqué de la búsqueda de justicia y represión de los casos de corrupción de funcionarios que atentan contra los intereses públicos e individuales

Por su parte la defensoría del Pueblo señaló que la propuesta de hacer imprescriptible la acción penal para casos de corrupción de funcionarios, contenida en diversos dispositivos de los Proyectos de Ley N° 127/2016- CR, N° 121/2016-CR y N° 119/2016-CR, por ejemplo, no supera el examen de idoneidad y necesidad, al no acreditar que el tiempo actual para las investigaciones fiscales es, de un lado, inidóneo para procesar y sancionar a funcionarios corruptos antes que estos se amparen en la prescripción de sus delitos (asumiendo que esta fuera - como no es- la única causa de la impunidad), y, al no tomar en consideración medidas menos gravosas contra la garantía de la prescripción de los delitos (para la libertad personal), como lo puede ser la ampliación de los plazos de prescripción para los delitos más recurrentes o la restricción de esta figura –de la imprescriptibilidad– a figuras delictivas agravadas de la relación de ilícitos contra la administración pública.

Raúl Pariona Arana estima que la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción no es necesaria para la lucha contra la impunidad. Dicho autor refiere que establecer dicha imprescriptibilidad supondría equiparar los delitos de corrupción con los de lesa humanidad, siendo que la gravedad del daño y relevancia de los bienes jurídicos protegidos con los tipos penales son distintos, por lo que excluir de dicha regla de imprescriptibilidad a otros delitos de singular gravedad como los de violación de la libertad sexual, podría conllevar a una decisión arbitraria en la adopción de la política criminal, al señalar que La imprescriptibilidad y su efecto simbólico -de que con ello el problema de la impunidad se ha solucionado- podría generar también un efecto negativo que podría llevar al Estado a renunciar a su deber de resolver las causas judiciales con celeridad.

Explica Horvitz Lennon, la excepción a la regla de la prescripción está configurada por aquellos hechos que, por su entidad y significación para la comunidad humana, no dejan de ser vivenciados como gravísimos por el transcurso del tiempo ni por sus protagonistas ni por los afectados ni, en fin, por la sociedad toda. Más aún, cuando tales delitos son perpetrados en el seno de un aparato organizado de poder (paradigmáticamente, la estructura estatal), sus autores actúan contando con la impunidad de tales ilícitos, la que se expresa, en el caso de la prescripción, como omisión de la persecución penal por parte del mismo aparato de poder cuyos miembros cometieron los delitos. Este es el fundamento de justicia política de las disposiciones convencionales en el ámbito internacional que establecen la imprescriptibilidad de ciertos crímenes gravísimos.

## **2. Reducción de plazos prescriptivos:**

En palabras de CABALLERO, el artículo 81 del Código Penal guarda estrecha relación con el artículo 22° del mismo cuerpo legal. Ambos textos tienen el mismo fundamento para reducir a la mitad los términos de prescripción de la acción penal y para producir la pena conminada, respectivamente. El fundamento aludido es la imputabilidad restringida del agente en atención expresa a su edad. La ley penal nacional presume iuris et de iure que toda la persona con más de 18 años de edad o menor de 21, en el momento de realizar la acción penal tiene restringida su capacidad para determinarse según esta comprensión. Como se sabe la imputabilidad se sustenta en un conjunto de condiciones bio-psicológicas que emergen de la concreta personalidad del agente

En la casación N° 442-2015 del Santa, donde se cita a URQUIZO OLAECHEA, en el fundamento vigésimo, se señalan dos puntos de vista en relación al artículo 81° del Código Penal, siendo el primero de ellos, desde una interpretación teleológica y sistemática por el que se infiere que el fundamento de la reducción de plazos de prescripción de la acción penal es de naturaleza material y axiológica; mientras que desde el punto de vista material, se supone que los ciudadanos menores de 21 años y mayores de 65 años de edad no poseen plena capacidad de imputabilidad, ya sea porque aún no han alcanzado un desarrollo psíquico cabal, esto es menores de 21 años, o porque la capacidad psíquica está en pleno proceso de deterioro producto de la vejez, mayores de 65 años. Por lo que se indica que en base a este segundo punto de vista, en dichos supuestos no existe necesidad social de conservar el plazo de prescripción. Asimismo la anotada casación en su fundamento vigésimo primero, menciona citando a Peña Cabrera Freyre, que la edad avanzada en un individuo, que va camino hacia la senilidad produce una serie de cambios en sus facultades sensitivas y perceptivas; por lo que la disminución de esas capacidades significan a la postre una afectación y que de motivarse conforme el directivo de conducta contenido en el enunciado penal, se induce a un plano de responsabilidad restringida o dígase disminuida. Del mismo modo se indica que “la responsabilidad restringida está fundamentada dogmática y políticamente en la idea de una imputación parcial de la sociedad (corresponsabilidad social), además de otros factores, tales como la mayor impulsividad del joven, mayor habilidad o mayores posibilidades de reinserción en tratamientos educativos” (Castillo Alva, 2018)

En lo que respecta a los jóvenes entre 18 a menos de 21 años, como se reitera, no alcanzan la madurez de repente, pues se trata de un proceso paulatino, que varía de un individuo a otro. Debido a esta situación, las legislaciones contienen normas que regulan un periodo intermedio comprendido entre el límite que separa el derecho penal de menores, del derecho penal común y el límite cronológico a partir del cual se considera plenamente adulta (madura) a una persona; pues como sostiene Pinatel, “la madurez no comienza al final de la adolescencia”, que “hay un periodo intermedio que va de los 18 a 25 años, donde el crecimiento aún no ha terminado, donde la osificación evoluciona, el sistema nervioso termina su desarrollo” y, por último, que “la madurez propiamente dicha comienza a los 25 años”.

Según el artículo 22° del Código Penal a estos individuos ya les resulta aplicable las normas y sanciones del derecho penal común, no obstante, por su situación personal, son considerados como incapaces relativos o imputables restringidos. Es decir, no se les considera titulares de una capacidad plena para actuar culpablemente, razón por la cual el código de 1924 preveía que la atenuación de la represión, debía ser proporcional al grado de culpabilidad; sin embargo, las sanciones previstas en dicho cuerpo legal eran las mismas que las destinadas a los adultos; mientras que el código actual sólo prevé, para dichos incapaces relativos, que “podrá reducirse prudencialmente la pena para el hecho punible cometido”.

Por otra parte el límite cronológico de que las personas sean mayores de 65 años, tiene su fundamento en que después de la edad adulta donde la persona alcanza su madurez y

durante la cual se estabilizan las relaciones familiares, sociales y profesionales, acaece un periodo de disminución de las actividades vitales, que desemboca en una etapa de degeneración que afecta a las facultades vitales. Estas deficiencias al provocar una disminución de la capacidad de comprender o de determinarse, traen como consecuencia que la capacidad de culpabilidad de la persona afectada sea considerada como limitada; por lo que si la degeneración del estado de salud de la persona provoca anomalías psíquicas, la disposición aplicable, según las circunstancias, será entonces el artículo 20, inciso 1, o el artículo 21. (POZO, 2005).

En ese sentido, hemos visto que la reducción de plazos prescriptorios tiene su fundamento en la responsabilidad restringida, donde las personas al no tener una capacidad psíquica totalmente desarrollada o al encontrarse ésta en deterioro, hacen que no solo se les reduzca la pena a imponer si no también el tiempo de persecución del delito, ya que por las características personales de los agentes de esta figura, en el caso de los jóvenes se busca mayor impulsividad del joven y no dañar su proyecto de vida, y en el caso de las personas mayores de 65 años, se busca que sus capacidades mentales no se vean más afectadas. Por lo tanto, la imprescriptibilidad de los delitos contra la Administración pública, está colisionado con el derecho de igualdad -tratar desigual a los desiguales- de las personas que se encuentran inmersas en este beneficio, viéndose afectadas al no poderseles aplicar la reducción que les corresponde por razón de su edad.

#### **4.1.2. Consignar en el artículo 80 del Código Penal, la excepción a la imprescriptibilidad de los delitos contra la Administración pública en las personas con responsabilidad restringida**

##### **1. Imputabilidad restringida**

El artículo 22 del Código Penal de 1991 estableció, expresamente, como eximente incompleta de responsabilidad penal, lo siguiente: “Podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años, o más de sesenta y cinco años, al momento de realizar la infracción”. Esta disposición, como se advierte de su tenor, no contemplaba ninguna excepción por razón del delito cometido. Sin embargo con las posteriores reformas sucesivas, desde la dación del Código Penal, se incorporaron progresivamente excepciones a esta eximente incompleta en atención a determinados delitos, considerados muy graves. Los cambios legislativos son los siguientes:

- Ley número 27024, de 25-12-1998. En lo pertinente, agregó al artículo 22 del Código Penal un segundo párrafo, cuyo tenor literal es: “Está excluido el agente que haya incurrido en delito de violación de la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo agravado, atentado contra la seguridad nacional y traición a la patria, u otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua”.

- Ley número 29439, de 19-11-2009. En el primer párrafo, añadió la frase siguiente: “[...], salvo que haya incurrido en forma reiterada en los delitos previstos en los artículos 111, tercer párrafo, y 124, cuarto párrafo”.

- Ley número 30076, de 19-8-2013. En el segundo párrafo adicionó como delitos excluidos los de “homicidio calificado, homicidio calificado por la condición oficial del agente, feminicidio, extorsión, secuestro, robo agravado y apología”.

- Decreto Legislativo número 1181, de 27-7-2015. En el segundo párrafo aumentó como delitos excluidos los de “criminalidad organizada, sicariato, conspiración para el delito de sicariato y ofrecimiento para el delito de, genocidio, desaparición forzada y tortura”.



Las salas Penales de la Corte Suprema, con fecha 2017, publicado en el diario oficial el peruano, el día 17 de octubre de ese año, expidieron el Acuerdo Plenario N° 4-2016/CIJ-116, que estipuló como doctrina legal vinculante para los jueces penales de la república, que las exclusiones contenidas en el artículo 22° del código penal resultan inconstitucionales y los jueces penales ordinarios no deben aplicarlas.

PRADO SALDARRIAGA, en su libro Manual del Derecho Penal señala que, el fundamento de la configuración jurídica de la responsabilidad restringida del artículo 22 del Código Penal estriba, hasta cierto punto, en que el individuo no alcanza la madurez de repente y a los individuos entre dieciocho y veintiún años no se les considera titulares de una capacidad plena para actuar culpablemente, pues su proceso de madurez no ha terminado; y, además, en que la edad avanzada del agente expresa un periodo de decadencia, de disminución de las actividades vitales, que desemboca en una etapa de degeneración que afecta a las facultades vitales, por lo que la capacidad de culpabilidad debe ser considerada como limitada.

Las restricciones indicadas líneas arriba, las cuales se fueron agregando al artículo 22, se iniciaron en 1998 y prosiguieron con la última reforma legislativa del 2015, éstas están referidas a la comisión de veintiún modalidades delictivas, que pueden calificarse de muy graves. Estas, según como fue precisado en el Acuerdo Plenario N° 4-2016, se encuentran en el injusto penal: antijuricidad, no en la categoría culpabilidad. En base a ello, en dicho Acuerdo Plenario se planteó la pregunta sobre si tales excepciones a la regla de disminución de la respuesta penal, son constitucionalmente admisibles desde el principio de igualdad ante la ley. Precisando que, éste es un derecho fundamental de invocación directa sin necesidad de desarrollo legislativo previo, por cuanto es un valor constitucional que forma todo el ordenamiento jurídico infraconstitucional. Esta igualdad, como derecho público subjetivo, conlleva la alegación de discriminación, la cual implica una desigualdad que puede tener su origen en un hecho, en la diferenciación de tratamiento legal no justificado constitucionalmente o, finalmente, en la aplicación de una ley que produzca un resultado inconstitucional; ya que el derecho a la igualdad es, como todo derecho subjetivo garantizado por la Constitución, un derecho erga omnes, lo que implica, como resultado, que todos los jueces tienen el poder –y el deber– de aplicar directamente las normas constitucionales en las controversias sometidas a su juicio. (RICCARDO, 2016)

Asimismo, se señaló que, la doctrina constitucionalista ha expuesto que se está ante una desigualdad ante la ley cuando, frente a dos supuestos de hecho semejantes, trata, de forma distinta, sin ninguna justificación, a diferentes sujetos. En cuanto a los requisitos de la prohibición de discriminación primero, no se tratan de una lista cerrada de presupuestos, sino de todas aquellas situaciones que pueden producir un tratamiento diferenciado, que se traduzca en un perjuicio para personas o grupos; segundo, esta diferenciación no está justificada ni atiende a fines legítimos; y, tercero, no supera el test de la racionalidad (BALAGUER CALLEJÓN, FRANCISCO; GREGORIO CÁMARA VILLAR y OTROS, 2014).

En esa línea, en el mencionado Acuerdo también se planteó como pregunta, si es posible, entonces, una discriminación en el supuesto de hecho del artículo 22 del Código Penal basado, como pauta de diferenciación, en la entidad del delito cometido; dando una respuesta negativa, debido a que se consideró que, la Ley incluye una discriminación no autorizada constitucionalmente, y que la antijuricidad penal se refiere a las conductas que son contrarias a las normas que rigen el Derecho Penal –típicas y no amparadas en una causa de justificación–, mientras que la culpabilidad se circunscribe al sujeto que comete esa conducta, respecto del que debe afirmarse que actuó pese a estar motivado por la norma que le impedía adoptar un comportamiento distinto. Por lo que una atiende al hecho cometido –a su gravedad o entidad– y la otra a las circunstancias personales del sujeto<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Acuerdo Plenario N°4-2016, tomado de <https://legis.pe/acuerdo-plenario-4-2016-restricciones-imputabilidad-relativa-confesion-sincera/>

Ahora bien, allí se estableció que, si la edad del agente está referida a su capacidad penal, no es razonable configurar excepciones a la regla general en función de criterios alejados de este elemento, como sería uno centrado en la gravedad de ciertos delitos. La gravedad del hecho es un factor que incide en la entidad, importancia, relevancia social y forma de ataque al bien jurídico vulnerado, mientras que la culpabilidad por el hecho incide en factores individuales concretos del agente, al margen del hecho cometido, que tiene su propia escala de apreciación.

De ello se colige que, el grado de madurez o de disminución de las actividades vitales de una persona en razón a su edad no está en función directa a la entidad del delito cometido. La disminución de la pena, según el presupuesto de hecho del artículo 22 del Código Penal, no tiene su fundamento causal y normativo en las características y gravedad del injusto penal, sino en la evolución vital del ser humano.

Por ende, este factor de diferenciación no está constitucionalmente justificado. En igual sentido, ya se ha pronunciado la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema en las Consultas números 1260-2011, de 7-6-2011, y 210-2012, de 27-4-2012. Las exclusiones resultan inconstitucionales y los jueces penales ordinarios no deben aplicarlas.

Asimismo, se tiene que la casación N°1672-2017<sup>17</sup> en su fundamento cuarto, se precisó tres puntos: primero sobre el principio de igualdad; señaló que el principio de igualdad, reconocido en el artículo 2, I 2, de la Constitución Política del Perú, i) es un derecho subjetivo de las personas a obtener un trato igual, que obliga y limita a los poderes públicos a respetar y que exige que los supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas. ii) Que si bien es una clausula general, permite incorporar un elemento diferenciador de relevancia jurídica, en tanto ofrezca una justificación objetiva y razonable según juicios de valor generalmente aceptados; y iii) que es necesario que el precepto cuestionado introduzca directa o indirectamente una diferencia de trato entre grupos o categorías de personas, y que las situaciones subjetivas que quiera traer a la comparación, es decir que el término de comparación no resulte arbitrario ni caprichoso. Como segundo punto, sobre la minoría relativa de la edad –periodo de desarrollo de las personas, esta tiene relevancia legal porque se le anuda determinados efectos en la determinación de la pena para el agente delictivo- del que se reconoce que el periodo de madurez no ha terminado-, y tiene como sustento un aspecto vinculado, no a la conducta perpetrada, sino a la evolución biológica y psicológica de toda persona para alcanzar la madurez-su punto de referencia es la categoría culpabilidad, y no antijuricidad-; asimismo se indica que no es posible introducir diferencias en esta categoría de personas-los llamados jóvenes delincuentes- en atención a factores no equiparables. Dichas precisiones son la razón de ser por las que la Corte Suprema considera arbitraria e inconstitucional las exclusiones del Código Penal.

De lo expuesto, se advierte que, la corrupción debe ser combatida eficazmente y como tal formar parte de la política criminal de nuestro país; y una de las medidas que ha tomado el estado para combatirla es la “imprescriptibilidad”, que desde mi punto de vista considero es una medida que nació teniendo como base garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, debido a que la corrupción afecta de manera indirecta los diferentes aspectos de la persona humana, sea a nivel económico, educativo, salud, etc.; además también se centra en la “buena administración”, la cual como lo ha señalado nuestro Tribunal Constitucional, que es un principio constitucional que se deduce del artículo 39° de la Constitución, así como del artículo 44°. Es así que considero que, la imprescriptibilidad puede afirmar la lucha contra la corrupción, pues es una consecuencia natural de un régimen democrático en el que se tiene como guía de actuación el principio de buena administración y de buen gobierno en general, para todos los entes y funcionarios públicos.

Ahora bien, independientemente de que las posturas a favor o en contra de la imprescriptibilidad son muchas, la figura ya está creada, y lo que queda pendiente son los

---

<sup>17</sup> Casación N° 1672-2017 tomada de <https://gt.vlex.com/vid/728735257>

supuestos agravados en los que se aplicará, que como se ha explicado en los fundamentos anteriores, existen diversos proyectos, que van desde la pena a imponer hasta el tipo de delito según el bien afectado. Cuando ya se regulen dichos supuestos agravados, y al aplicarse estos, tanto para los funcionarios como para los particulares, se vulnerará el derecho a la igualdad de las personas con responsabilidad restringida- la cual no solo tiene sus efectos en la reducción de la pena sino también en la reducción de los plazos prescriptorios-, pues está tratando de forma distinta, sin ninguna justificación, a las personas que tienen una imputabilidad disminuida; es decir está siendo discriminatoria al pretender establecer mediante los supuestos agravados, que determinados delitos contra la Administración Pública sean imprescriptibles sin establecer ninguna excepción para este tipo de personas, quienes por su condición personal gozan de esta eximente imperfecta, que como se ha mencionado en el acuerdo plenario tiene su fundamento en el grado de madurez o de disminución de las actividades vitales de la persona en razón a su edad, y no está en función directa a la entidad del delito cometido. Esta discriminación incluida en el artículo 41 de la Constitución Política del Perú, se debe a que el principio de igualdad, predica la identidad de los iguales, y de la diferencia entre los desiguales, así como permite dar un tratamiento diferente a distintas personas cuando aquellas se encuentran en diversas situaciones de hecho. En resumen, el trato diferenciado en las personas con responsabilidad restringida, se ha dado por razón de la naturaleza de la persona- evolución biológica y psicológica de toda persona para alcanzar la madurez- al no tener una capacidad de culpabilidad completa, cumpliéndose así el principio de igualdad desde el lado “tratar desigual a los desiguales”; sin embargo esta vertiente, se ha visto vulnerada al haberse establecido la imprescriptibilidad sin hacer la diferenciación de las personas entre dieciocho y menores de 21 años y los mayores de 65 años de edad, convirtiéndose en discriminatoria pues no cumple el test de racionalidad, y proporcionalidad.

Por lo tanto, la imprescriptibilidad al colisionar con la figura de la reducción de plazos prescriptorios, la cual tiene su esencia en la responsabilidad restringida, lleva a que resulte necesario que se consigne en el artículo 80 del código penal, -donde se entiende que según el principio de legalidad se consignaran los supuestos agravados en los que serán imprescriptibles los delitos contra la Administración Pública-, como una excepción a la imprescriptibilidad, que esta es inaplicable a las personas con responsabilidad restringida; porque caso contrario sería consentir una diferencia de trato no justificada constitucionalmente frente a personas que se encuentran en una situación particular, siendo en este caso procesados con más de 18 pero menos de 21 años así como con 65 años; en consecuencia por disposición abstracta de la ley (imprescriptibilidad) no resulta posible atender, desconociendo las características personales del agente, las cuales le permiten tener una reducción de plazos prescriptorios a la mitad.

## CONCLUSIONES

- El legislador nacional determinó la responsabilidad restringida en nuestro país atendiendo a nuestra realidad sociocultural, y a fundamentos psico-biológicos y antropológicos.
- La imprescriptibilidad de los delitos que prevé el artículo 41 de la Constitución Política del Estado, y que por el principio de legalidad será regulada en el código penal, convierte en inaplicable la reducción de los plazos prescriptorios que señala el artículo 81 del mismo cuerpo legal; ello debido a que la esencia de la responsabilidad restringida y por consiguiente de la reducción de plazos prescriptorios, es en razón de la edad y no a la gravedad del delito cometido; viéndose afectadas las personas mayores de 18 y menores de 21 años así como los mayores de 65 años de edad, al ir la imprescriptibilidad en contra del principio de igualdad.
- La responsabilidad restringida, no sólo tiene como efecto la reducción de la pena a imponer en el delito cometido; sino también tiene efectos en la reducción de plazos prescriptorios; lo que nos lleva, al tener ambas figuras el mismo fundamento y efecto, que si las distinciones que hace el legislador para aplicar la reducción de pena vulneran el principio de igualdad, también se quebrantará dicho principio al haberse establecido la imprescriptibilidad en los delitos más graves, al no reconocer el beneficio de la reducción de plazos prescriptorios; es decir el trato que reciben los mayores de 18 a menos de 21 y más de 65 años, con la imprescriptibilidad termina siendo un trato discriminatorio, por lo que se debe establecer como excepción a esta imprescriptibilidad que no será aplicable a personas con responsabilidad restringida.
- Legislativamente no se ha determinado que tipos penales son considerados graves y por lo tanto imprescriptibles, conforme lo señala el artículo 41 de la Constitución Política del Estado; no obstante, los delitos una vez regulados aceptan y sea como autor o partícipe a personas con responsabilidad restringida, por lo que es preciso que se regule la excepción en los agentes con responsabilidad restringida.

## **RECOMENDACIONES**

- Que de manera inmediata el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura apruebe la Propuesta Legislativa que venimos sustentando a través de la presente para que posteriormente sea elevada al Congreso para su discusión, debate, aprobación, modificación de la norma y publicación de la misma.
- El Congreso de la República en aplicación del Principio de legalidad y conforme lo prevé el artículo 41 de la Constitución Política del Estado, debe precisar legalmente que delitos contra la Administración Pública son graves y por ello imprescriptibles.
- Los proyectos de Ley, que tienen como finalidad modificar artículos, deben ser redactados teniendo en cuenta las figuras relacionadas con el tema a modificar, puesto que de no hacerlo generaría confusión en los órganos que administran justicia, llevando a que existan diversos criterios que luego tienen que ser dilucidados mediante Acuerdos Plenarios o Sentencias Casatorias, siendo los más perjudicados los justiciables.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALFARO, L. M. (2008). *Excepciones, Cuestión previa y cuestión prejudicial*. Lima: Editora Jurídica Grijley.
- Anticorrupción, I. N. (2001). *Un Perú sin corrupción. Condiciones, lineamientos y recomendaciones para la lucha contra la corrupción*. Lima.
- ÁVALOS, G. L. (2017). La propuesta legislativa de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios. *Revista Jurídica Alerta Informativa* , 27.
- BALAGUER CALLEJÓN, FRANCISCO; GREGORIO CÁMARA VILLAR y OTROS. (2014). *Manual de Derecho Constitucional I*. Madrid: Tecnos.
- BINDER, A. (2004). *"Prescripción de la Acción Penal: La secuela del Juicio en su justicia penal y Estado de Derecho", en Justicia Penal y Estado de Derecho*. Buenos Aires: Ad-Hoc.
- CABALLERO, F. (1981). *Imputabilidad Penal (capacidad personal de reprochabilidad Etico Penal)*. Buenos Aires.
- CACERES JULCA, R. (2010). *Las excepciones y Defensas procesales, Teoria y Practica de la defensa de forma contra la acción en el Código Procesal Penal*. Lima: Jurista Editores E.I.R.L.
- Castillo Alva, J. L. (2018). Suspensión de la Prescripción. *Actualidad Penal* , 231-243.
- Claus, R. (1997). *Derecho Penal Parte General I-Fundamentos de la Teoría del Delito*. Lima: Civitas S.A.
- COLOMA MARQUINA, J. (1991). *Definiciones y contenido del principio de igualdad, aproximación inicial a la jurisprudencia constitucional peruana*. Lima: Comision Andina de Juristas.
- Comisión de Constitución, C. (10 de julio de 2014). *Poder Legislativo-Cámara de reresentantes*. Obtenido de <https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/D2014071398-004168245.Html>
- (2000). *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*. Gaceta Oficial N° 5.453.
- DE LA OLIVA, Santos; ARAGONESES MARTINEZ; HIMOJOSA SEGOVIA; MUERZA ESPARZA. (1993). *Derecho Procesal Penal*. Madrid: Centros de Estudios Universitarios Ramon Areces.
- Donna, A. (2004). *Deito contra la administración pública*. Buenos Aires: RUBINZAIL CULZONI.
- Ecuador, C. P. (2008). Obtenido de [http://www.miniseriopublico.gob.ve/c/document\\_library/get\\_file?p\\_l\\_id=10240%folderId=1235](http://www.miniseriopublico.gob.ve/c/document_library/get_file?p_l_id=10240%folderId=1235)
- ESCUSOL BARRA, E. (1993). *Manual de Derecho Procesal Penal*. Madrid: Colex.
- GARCIA MORILLO, J. (1991). *La clausula general de igualdad*. Valencia.
- GIOVANNI, L. (1963). *Tratado de Derecho Procesal Penal*. Buenos Aires: EJE.A.
- GOMEZ ORBANEJA, HERCE QUEMADA. (1989). *Derecho Procesal Penal*. Madrid: Artes Gráficas y Ediciones.

- HORVITZ LENNON, M. (2006). *Anuario de Derechos Humanos*. Obtenido de Amnistía y Prescripción en Causas sobre Violación de Derechos Humanos en Chile.: <http://www.cdh.uchile.cl/anuario2/nac7.pdf>
- HUERTA GUERRERO, L. A. (2003). *El Derecho a la Igualdad*. Lima: Comisió Andina Juristas.
- INGA ZACARIAS, R. L. (23 de agosto de 2016). Obtenido de <http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2015/12/Comentario2.pdf>
- Judicial, C. T. (2001). *Informe final de la comisión de investigación de planificación de políticas de moralización, eticidad y anticorrupción*. Lima.
- Judicial, C. T. (2001). *Consejo Transitor Informe final de la comisión de investigación de planificación de políticas de moraización , eticidad y anticorrupción*. Lima.
- JULCA, R. E., & BARRENECHEA, K. H. (2010). *Las Excepciones y defensas Procesales*. Lima: Jurista Editores E.I.R.L.
- JURISTAS, C. A. (2003). *Corrupción judicial. Mecanismos de control y vigilancia ciudadana*. Lima: Comisión Andina de Juristas.
- Justicia., C. E. (15 de octubre de 2018). *Planificando lo justo*. Obtenido de <http://www.justiciaviva.org.pe/ceriajus/diagnostico/cap5.pdf>.
- LUJAN, T. (2013). *Diccionario Penal y Procesal Penal- presenatción Luis Lama Puccio*. Lima: Gacete jurídica.
- MEINI, I. (2008). *Deitos contra la administración pública*. . Guatemala: USAID.
- MIXÁN MASS, F. (1999). *Cuestión Previa, Cuestión Prejudicial, Escepciones en el Procedimiento Penal*. Trujillo: BLG.
- MONTOYA VIVANCO, M. (2015). *Manuel sobre los Delitos contra la Administración Pública*. Lima: Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- MUJICA, J. (2011). *Micropolíticas de la corrupción. Redes de poder y corrupción en el Palacio de Justicia*. Lima: Asamblea General de Rectores.
- O'DONELL, D. (1988). *Proteccion Internacional de los derechos Humanos*. Lima: Comisiín Andina de Juristas.
- OSSORIO, M. (1998). *Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales*. Buenos Aires: Heliasta.
- PASTOR, D. R. (1993). *Prescripción de la Persecución Código Procesal Penal*. Buenos Aire: Editores del Puerto.
- PAVON VASCONSELOS, F. (2004). *Manual de Derecho Penal Mexicano*. Mexico.
- PEÑA CABRERA FREYRE, A. R. (2008). *Derecho Penal, parte especial*. Lima: Moreno-.
- PEÑA CABRERA, F. (2013). *Direccionario Real y Procesal penado por la prisntacion de planchtado de la acusada*. Lima: Abogar que , garantíad conom´nivoa.
- POZO, J. H. (2005). *MANUAL DE DERECHO PENAL GENERAL I*. Lima: Grijley.
- Prado Saldarriaga, victor; Hurtado Pozo, Jose. (2011). *Manual de Derecho Penal-Parte General I*. Lima: Grijley.

- RAMÍREZ, S. G. (1982). *Justicia Penal*. Mexico: Porrúa.
- REAÑO PESCHIERA, J. (2009). *Formas de intervención en los delitos de peculado y tráfico de Influencias*. Lima: Jurista Editores.
- REINHART MAUROCH, H. Z. (1997). *Derecho Penal parte General II*. Lima.
- RICCARDO, G. (2016). *Lecciones de Derecho Constitucional*. Lima.
- RODRIGUEZ PIYERO, Miguel y FERNANDEZ LÓPEZ, María Fernanda. (1986). *Igualdad y Discriminación*. Madrid: Tecnos.
- ROMÁN LÓPEZ, M. (2011). *Cuando la justicia pen La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y su presunta colisión con instituciones clásicas del derecho penal*. Lima: USMP.
- ROY FREYRRE, L. (1998). *Causas de extinción de la acción penal y de la pena*. Lima: Grijley.
- RUBIO CORREA, M. (1999). *Estudio de la Constitución Política de 1993*. Lima: Pontifica Universidad Católica del Perú.
- SAN MARTIN CASTRO, C. (2003). *Derecho Procesal Penal*. Lima: Grijley.
- SOLER, S. (1963). *Derecho Penal Argentino , tomo II*. Buenos Aires: Argentina.
- SOTO ACOSTA, F. C. (2006). *La imputailidad disminuida como origen del sistema de menores delincuentes*. Mexico: Universidad Iberoamericana.
- URQUIZO OLAECHEA, J. (2014). *Código Penal. segunda Edición*. Lima: Imagen Estudios S.A.C.
- URTECHO BENITES, S. E. (2007). *Los medios de defensa técnicos y el Nuevo Proceso Penal*. Lima: Morena S.A.
- Uruguay, R. o. (julio de 2014). *Comisión de Constitución, Códigos, Legislación Genera y Adinistración*. Obtenido de <https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/D2014071398-005125649.pdf>
- VARGAS, F. R. (2017). *Manual operativo de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos*. Lima: Nomos &Thesis EIRL.
- VÁSQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, F. (s.f.). El consentimiento del ofendido en los delitos contra la administarcion pública (sobre el bien juridico protegido en los delitos de cargo). *revista electronica de ciencia penal y criminologia* .
- VILLA STEIN, J. (1998). *Derecho Penal. Pare General*. Lima: San Marcos.
- YON RUESTA, R. (2010). *Responsabilidad social de un estudio de abogados especializado en materia penal*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.



## ANEXOS

### ANEXO 1

**Título del Proyecto:** “La Imprescriptibilidad De Los Delitos Contra La Administración Pública Y La Reducción De Plazos Prescriptorios”

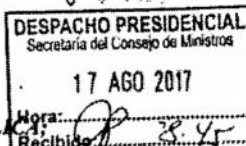
**Nombre del Tesista:** Iris Isabel Curay Navarro

	Preguntas	Hipótesis	Objetivos
G	¿La imprescriptibilidad de los delitos contra la Administración Pública convierte en inaplicable la reducción de los plazos prescriptorios que señala el artículo 81° del Código Penal?	La imprescriptibilidad de delitos contra la Administración Pública haría inviable la reducción de plazos prescriptorios, porque no tiene en consideración la responsabilidad restringida de las personas entre 18 y menos de 21 años de edad así como de las personas mayores de 65 años.	Determinar si la imprescriptibilidad de los delitos que prevé el artículo 41 de la Constitución Política del Estado convierte en inaplicable la reducción de los plazos prescriptorios que señala el artículo 81 del Código Penal
El	¿Se debe consignar en el artículo 80 del Código Penal in fine que la imprescriptibilidad es inaplicable en las personas con responsabilidad penal restringida?	Se debería consignar en la parte in fine del artículo 80 del Código Penal que la imprescriptibilidad es inaplicable en las personas con responsabilidad restringida teniendo en consideración que las personas de 18 a menos de 21 años de edad, no han alcanzado su madurez plena; mientras que en los mayores de 65 años de edad se inicia la disminución de sus facultades cognitivas.	Analizar si se debería consignar en el artículo 80 del Código Penal in fine que la imprescriptibilidad es inaplicable en las personas con responsabilidad penal restringida.

## ANEXO 2

Sobn 3.

Proy. 119 y otros



EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ha dado la siguiente Ley de Reforma Constitucional:



### LEY DE REFORMA DEL ARTÍCULO 41° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

Artículo único. Modificación del artículo 41° de la Constitución Política del Perú



Modifícase el cuarto párrafo del artículo 41° de la Constitución Política del Perú, conforme al texto siguiente:



"Artículo 41°.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.

Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial.

La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.

El plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra la Administración Pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los particulares.

La acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves, conforme al principio de legalidad".

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.  
En Lima, a los diecisiete días del mes de agosto de dos mil diecisiete.

LUIS GALARRETA VELARDE  
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA  
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

## **Anexo 3**

### **PROYECTO DE LEY**

Proyecto de Ley N° 3726-2018

1. Proyecto de Ley que modifica el Artículo 80 del Código Penal.
2. El que suscribe, IRIS ISABEL CURAY NAVARRO, integrante del Colegio de Abogados de Piura, en uso de las facultades conferidas en el artículo 107° de la Constitución Política del Perú propone el Proyecto de Ley siguiente:

**LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 80° DEL CODIGO PENAL.**

#### **ARTÍCULO 1°: OBJETO DE LA LEY.**

Modificar el artículo 80° del Código Penal, con el fin de incorporar la excepción a la figura de la imprescriptibilidad en los casos de los delitos contra la Administración Pública o contra el patrimonio.

#### **ARTÍCULO 2°: MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 80° DEL CÓDIGO PENAL.**

Modifícase el artículo 80° de Código Penal en los siguientes términos:

Artículo 80°: Plazos de prescripción de la acción penal.

“la acción penal es imprescriptible en los delitos previstos en los artículos (...). Excepto en los casos en que el funcionario o particular sea sujeto de responsabilidad restringida al momento de comisión del delito”.

#### **DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES.**

**Primera.-** Vigencia de la ley.

La presente norma entra en vigencia desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

**Segunda.-** Disposición derogatoria.

Deróguense o déjese sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

## **APÉNDICES**

### **1. LEY DE REFORMA DEL ARTÍCULO 41° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, PUBLICADO EN AGOSTO 22, 2017**

#### **LEY N° 30650**

Mediante la presente ley se modifica el cuarto párrafo del artículo 41° de la Constitución Política del Perú, conforme al texto siguiente:

**“Artículo 41°.-** Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.

Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial.

La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.

El plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra la Administración Pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los particulares. La acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves, conforme al principio de legalidad”.

#### **2. Acuerdo Plenario N° 4-2016/CJ-116**

“(…) si la edad del agente está referida a su capacidad penal, no es razonable configurar excepciones a la regla general e función de criterios alejados de este elemento, como sería uno centrado en la gravedad del delito. La gravedad del hecho es un factor que incide en la entidad, importancia, relevancia social, y forma de ataque al bien jurídico vulnerado, mientras que la culpabilidad por el hecho incide en factores individuales concretos del agente”.

#### **3. Casación N° 442-2015-DEL SANTA**

**“Vigesimosegundo.-** El código Procesal Penal no establece ninguna excepción a la aplicación del artículo ochenta y uno del Código Penal, referido a la reducción del plazo de la prescripción de la acción penal en los casos en que se haya suspendido o interrumpido.

**Vigesimotercero.-** por el contrario, la doctrina es uniforme en señalar que el contenido del artículo ochenta y uno del Código Penal se circunscribe dentro de un supuesto de responsabilidad restringida, en el cual se goza plenamente del beneficio de la reducción a la mitad del plazo prescriptorio.”

#### **4. Casación N° 1672-2017**

**“Fundamento cuarto:** (…) El principio de igualdad, reconocido en el artículo 2, 1 2, de la Constitución Política del Perú, (…) es un derecho subjetivo de las personas a obtener un trato igual, que obliga y limita a los poderes públicos a respetar y que exige que los supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas”.

## **5. Sentencia del Tribunal Constitucional N° 00009-2007-PI/TC**

“Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal, estamos frente a un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino a ser tratado de igual modo a quienes se encuentran en una idéntica situación. Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable.”

## **6. Consulta N° 1260-2011-Junin**

“(…) la diferencia de trato impuesta por el artículo 22° del Código Penal no se encuentra justificada constitucionalmente atendiendo a la juventud del procesado (menor de 21 años) a la fecha del ilícito, periodo durante el cual no ha alcanzado el grado de madurez necesario que le permita discernir adecuadamente el contenido del injusto.”